

RE: CONTESTACIÓN 05001310502120210043600

Juzgado 21 Laboral - Antioquia - Medellín <j21labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 14/02/2022 15:14

Para: roque3@gmail.com <roque3@gmail.com>

Cordial saludo,

Se acusa recibido. Se revisará y realizará el trámite correspondiente.

Cordialmente,

Johanna Castaño G  
Secretaria



**Juzgado 21 Laboral del Circuito, Medellín**

Cr. 51 # 44-53, Piso 4, Ed. Boulevard Bolívar

Correo: j21labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

Twitter: @J21LabMed

Facebook: Juzgado 21 Laboral Circuito Medellín

---

**De:** Roque Ortega <roque3@gmail.com>

**Enviado:** lunes, 14 de febrero de 2022 11:24 a. m.

**Para:** Juzgado 21 Laboral - Antioquia - Medellín <j21labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Asunto:** CONTESTACIÓN 05001310502120210043600

Muy buenos días

**ROQUE ALEXIS ORTEGA CORREA**, abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional Nro. 209.067 del Consejo Superior de la Judicatura, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.037.579.003, actuando como apoderado judicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones Regional Antioquia**, por medio del presente escrito allego, en término contestación de la demanda de la referencia con sus respectivos anexos.

<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>JULIÁN ALBERTO RICAURTE SANTAMARIA</b>
<b>Demandados:</b>	<b>COLPENSIONES PROTECCION S.A</b>
<b>Radicado:</b>	<b>05001310502120210043600</b>
<b>Asunto:</b>	<b>CONTESTACIÓN DE DEMANDA</b>
<b>Folios:</b>	<b>34</b>

--

Roque Ortega

 **EXP ADM CC-70128260.rar**

Señores

JUZGADO 21 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN  
E.S.D.

Proceso: ORDINARIO LABORAL  
Demandante: JULIAN ALBERTO RICAURTE SANTAMARIA  
Demandados: COLPENSIONES  
PROTECCION S.A  
Radicado: 05001310502120210043600  
Asunto: CONTESTACIÓN DE DEMANDA  
Folios: 34

Página / 1

**ROQUE ALEXIS ORTEGA CORREA**, abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional Nro. 209.067 del Consejo Superior de la Judicatura, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.037.579.003, actuando como apoderado judicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones Regional Antioquia**, por medio del presente escrito allego, en termino contestación de la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

**NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD CODEMANDADA,**  
**REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO**

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, es una empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, autonomía Administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el acto Legislativo 01 de 2005, modificadorio del artículo 48 de la Constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.

La representación legal la ejerce el Doctor Juan Miguel Villa Lora identificado con la cédula de ciudadanía 12.345.765 quien obra en su calidad de Presidente Encargado según consta en certificación expedida por la entidad el día 17 de octubre de 2018.

El domicilio principal es la Ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 N° 72-33 torre B, piso 11. Número telefónico 217 01 00.

**A LOS HECHOS**

**PRIMERO:** Es cierto según documentos aportados.

**SEGUNDO:** Es cierto según la historia laboral aportado

**TERCERO:** No me consta, toda vez que se trata de hechos totalmente ajenos a la entidad que represento, por no ser esta parte de las asesorías, a la parte que lo expresa le corresponde demostrar sus afirmaciones, lo anterior, conforme lo establecen los artículos 1757 del C.C. y 167 del C.G.P.

**CUARTO:** No me consta, toda vez que se trata de hechos totalmente ajenos a la entidad que represento, por no ser esta parte de las asesorías, a la parte que lo expresa le corresponde demostrar sus afirmaciones, lo anterior, conforme lo establecen los artículos 1757 del C.C. y 167 del C.G.P.

**QUINTO:** No me consta, toda vez que se trata de hechos totalmente ajenos a la entidad que represento, por no ser esta parte de las asesorías, a la parte que lo expresa le corresponde demostrar sus afirmaciones, lo anterior, conforme lo establecen los artículos 1757 del C.C. y 167 del C.G.P.

Página / 2

**SEXTO:** No me consta, toda vez que se trata de hechos totalmente ajenos a la entidad que represento, por no Colpensiones la administradora de pensiones del demandante, a la parte que lo expresa le corresponde demostrar sus afirmaciones, lo anterior, conforme lo establecen los artículos 1757 del C.C. y 167 del C.G.P.

**SEPTIMO:** Es cierto según documentos aportados.

**OCTAVO:** Es cierto, estando esta respuesta acorde a la ley teniendo en cuenta que es improcedente autorizar el traslado de la accionante del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen del Prima Media con Prestación Definida administrado actualmente por Colpensiones, lo anterior, de conformidad con el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo segundo de la Ley 797 de 2003, a quienes les faltare menos de 10 años para pensionarse, se encuentran impedidos para efectuar dicho traslado.

### **A LAS PRETENSIONES**

Señor Juez, me opongo a la prosperidad de la mayoría de las pretensiones formuladas dentro del libelo petitorio, por carecer de fundamentación fáctica, legal y probatoria, debiendo en todo caso absolver a mi poderdante de ellas y condenar en costas a la accionante.

Me opongo a que se declare la nulidad o la ineficacia del traslado de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCION a que se declare que la demandante esta válidamente afiliada al RPM administrada por LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y me opongo de igual manera a que se declare la afiliación a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en la medida que se pretende invalidar un acto que no solo fue válido, sino que produjo efectos jurídicos en tanto que el demandante efectuó aportes al RAIS, por lo que no es posible derivar obligaciones a cargo de Colpensiones. Es preciso considerar que la afiliación a las AFP PROTECCION S.A. se efectuó en el ejercicio legítimo de la demandante del derecho a la libre escogencia del régimen pensional, según lo preceptuado en el artículo 13 en su literal b) de la Ley 100 de 1993, sin que por ello pueda predicarse la existencia de un error por vicio del consentimiento, pues su elección se hizo manifiesta al momento de solicitar la vinculación a la Administradora seleccionada.

No hay razones fácticas ni jurídicas para que Colpensiones considere afiliado a quien se encuentra válidamente registrado en la **AFP PROTECCION S.A.** Además, es preciso aclarar que la demandante no hizo uso del derecho que tenía de



retractarse de la afiliación efectuada a la AFP PROTECCION S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1161 de 1994. Tampoco manifestó su deseo de retornar al Régimen de Prima Media con prestación definida administrado por mi representada, en los términos establecidos en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 3800 de 1994, ni elevó solicitud de vinculación cuando le faltaban más de 10 años de edad para arribar a la edad de pensión, según lo prescrito en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003.

Página / 3

Máxime teniendo en cuenta que es improcedente autorizar el traslado de la accionante del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen del Prima Media con Prestación Definida administrado actualmente por Colpensiones, lo anterior, de conformidad con el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo segundo de la Ley 797 de 2003, a quienes les faltare menos de 10 años para pensionarse, se encuentran impedidos para efectuar dicho traslado.

Así las cosas, no le asiste derecho a la demandante a ser considerado como afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrada por Colpensiones, sin solución de continuidad.

No se presenta oposición al traslado de los dineros recibidos por parte de PROTECCION S.A. Llegado el caso de prosperar la pretensión de nulidad del traslado, inclusive se indica que se debe de trasladar la totalidad de los dineros recibidos por PROTECCION S.A incluyendo cualquier cuota de administración que se haya generado, toda vez que esta es la consecuencia de la nulidad o ineficacia, hacer como si el traslado nunca hubiera ocurrido, pues de no hacerlo se estaría perjudicando a una entidad del Estado que nada tuvo que ver con las razones que llevan a solicitar el traslado.

En cuanto a las costas, si llegase a condenar a Colpensiones, me opongo porque no es posible dicha condena teniendo en cuenta que Colpensiones actuó de buena fe y acorde a derecho, por lo preceptuado en la ley; por otro lado no hizo parte de los hechos aquí descritos, ni se ha negado a responder en debida forma las solicitudes realizadas por el demandante frente a la entidad, ni está facultada para declarar ineficaz traslado alguno, por lo que en su lugar solicito se condene en costas a la parte activa o a las codemandadas.

### **EXCEPCIONES**

Con miras a salvaguardar los intereses de la institución a la cual represento y al haberme opuesto a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, me permito proponer las siguientes excepciones:

### **EXCEPCIONES DE MÉRITO**

#### **CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA – PARTICULARIDADES DEL CASO**

El artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho fundamental al debido proceso, estableciendo entre otros, el hecho que, toda persona tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra.

La anterior premisa, fue regulada y desarrollada por el artículo 167 de la ley 1562 de 2012 (Código General del Proceso), precisando:

ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Desarrolla entonces el artículo 167, dos nociones para la demostración y consecución de las pruebas al interior del proceso: (i) individualista y liberal, donde es la parte quien alega el hecho a quien le compete su demostración; (ii) facultativa, donde el Juez podrá invertir la carga de probar los supuestos de hechos que se alegan, atendiendo nociones de solidaridad y equidad, bajo las circunstancias particulares del caso concreto.

Así es que, la regla general es a la parte quien alega un supuesto de hecho es a quien le compete su demostración, sin embargo, está revestida de una excepción, y es bajo qué circunstancias concretas, el Juez de la Causa está facultado para invertir y exigir a la parte contra quien se alega o pretende demostrar el hecho, quien deberá llegar al interior del proceso, la prueba. Son 4 particularidades que permiten la inversión de la carga probatoria, y son estos:

1. Inmediatez con el objeto de debate.
2. Tener en su poder la prueba.
3. Inferioridad de la parte que busca la demostración del hecho.
4. Especialidad en la materia.

La sentencia C 086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del art. 167 del Código General del Proceso, indicando:

“7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio “quien alega debe probar” cede su lugar al principio “quien puede debe probar”. Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió -también de manera deliberada y consciente- no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la

prueba. Por el contrario, dejo abierta esa posibilidad al juez, “según las particularidades del caso”, para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, “entre otras circunstancias similares”.

Página / 5

Igualmente destaca la Corte constitucional que los eventos mencionados “recogen en buena medida las reglas trazadas por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la propia Corte Constitucional”. Además, agrega con nitidez que “el Legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios –algunos tal vez inimaginables-, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la “longa manus” del juez para restablecerla.”

Bajo las mismas reglas establecidas en el Código General del Proceso respecto del actuar del Juez y basar sus decisiones de conformidad con lo probado al interior del proceso, en material Laboral y de la Seguridad Social, el artículo 61 del Decreto Ley 2158 de 1948 (Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), indica lo siguiente:

**ARTICULO 61. LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO.** El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.

Descendiendo al caso concreto las premisas normativas antes referidas, podemos indicar y consecuentemente colegir, lo siguiente:

1. La afiliación y/o traslado de régimen del afiliado (a) – demandante, y selección del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ocurrió el día 8 de noviembre de 1994 en vigencia del Decreto Ley 663 del 02 de abril de 1993 (antes de 2009, año en el que se expide la Ley 1328 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.) “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración.”, solo se exigía a las Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías, atender el formulario con el lleno de los requisitos que para los efectos preveía la entonces Superintendencia Bancaria, a fin de demostrar la aceptación y consentimiento por parte de aquel.

Imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

2. Es claro que el entendimiento entre el RPM y el RAIS sugiere que los afiliados sean debidamente asesorados dado que hay aspectos técnicos que los diferencian.

Sin embargo, esta regla no puede interpretarse como una situación universal que desplace las situaciones de cada caso particular y que además invierta la carga de la prueba sin mayor análisis que la naturaleza experta que tiene la administradora de pensiones.

Página / 6

Este contexto tampoco puede desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad del demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Este último aspecto ha sido por ejemplo evaluado por la corte Suprema tratándose de afiliaciones tacitas donde prevalecen las actividades, cotizaciones y movimientos financieros a lo largo de la vida laboral.

En razón de lo anterior, podemos colegir sin lugar a equivoco que, en lo atinente a la carga de probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico del escrito de demanda, estos deben de estar a cargo del demandante, pues la AFP cumplió con las atribuciones legales vigentes y aplicables para el momento de la afiliación de la parte actora, y en razón a los principios rectores de equidad y solidaridad, imponerle una carga adicional, más allá del formulario de afiliación, pues con ello se acentuaba el consentimiento y aceptación por el afiliado, sería una carga desproporcionada e IMPOSIBLE de cumplir.

### **IMPOSIBILIDAD DE RETORNAR AL STATU QUO ANTE POR MÚLTIPLES AFECTACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES**

En reciente pronunciamiento la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia razonó que no es posible revertir ciertos efectos económicos como el deterioro que sufre el capital que ya ha sido objeto de pago a través de mecanismos de financiación como los bonos pensionales y las cuotas partes de entidades contribuyentes, como consecuencia ineludible del pago de mesadas pensionales. En efecto, es irreparable la pérdida de integridad del músculo financiero con que se respalda el pago de la prestación, por lo que forzar a través de una ficción jurídica la vuelta al estado anterior en que se encontraba las cosas, va en detrimento de los recursos de la Seguridad Social, bien sea que provengan de la Nación y/o demás entidades que deben contribuir al financiamiento del pasivo pensional. Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del Sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales

que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea.

Concretamente, esa alta corporación estableció :

“...Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante)<sup>1</sup>, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones: Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública. Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata. Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado. Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.”

Página / 7

Por lo expuesto, no es procedente la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades o si ha recibido la devolución de saldos de su cuenta de ahorro individual.

#### **INOPONIBILIDAD POR SER TERCERO DE BUENA FE**

a) La inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante COLPENSIONES, en casos de ineficacia de traslado de régimen Entendida la inoponibilidad (mecanismo protector), como la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros.



Es decir, que la ineficacia, resultaría inoponible frente a terceros de buena fe -como en este caso Colpensiones-, a la par que la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS.

Lo anterior, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros que tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

Página / 8

La Sala de Casación Civil, ha definido la inoponibilidad como aquella que “valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados”, raciocinio, que a su vez se deriva del principio de relatividad de los negocios jurídicos, es decir, que solo se producen efectos respecto de quienes voluntariamente participan de aquél; y COLPENSIONES no participó de dicho acto jurídico, luego no tiene por qué motivo alcanzarlo, ni mucho menos, afectarlo.

Precisamente, la jurisprudencia en la especialidad civil, indica que la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, muy por el contrario, algo que es ineficaz entre las partes (en este caso la afiliación al RAIS), se tenga como eficaz frente al tercero de buena fe (Colpensiones).

Así se ha dicho que:

“cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio válido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como válido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes”.

Es decir, que la inoponibilidad frente a un negocio jurídico ineficaz, permite que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe o, en otras palabras, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones, para lo cual, se probará el desmedro patrimonial que sufre la reserva pensional del RPM en caso de resultarle oponible la ineficacia de los traslados irregulares al RAIS.

#### B) Responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social

Resulta también relevante indicar, que las entidades de Seguridad Social no solo se sujetan a la responsabilidad propia de los contratos de aseguramiento, sino que se ciñen a obligaciones de índole constitucional que trascienden como administradoras de un servicio público de seguridad social.

En este caso, la responsabilidad de las AFP por la ineficacia de un traslado, no sólo se deben enmarcar a reparar el daño individualmente sometido a consideración de un Juez, sino que debe tener alcance frente a los daños indirectos que irradian o comprometen los derechos constitucionales de terceros, en razón de la reserva patrimonial de los pensionados y afiliados del RPM que se ven comprometidos con el desmedro que sufre la reserva pensional, y que si bien es cierto, la jurisprudencia ha indicado que al afiliado no le es atribuible y por ende no se le exige la equivalencia económica de los aportes que se devuelven del RAIS al RPM, no es menos cierto, que tal reparo económico lo debe asumir quien ha causado el daño y por virtud de la operancia de la inoponibilidad.

C) Realizar un juicio de proporcionalidad y ponderación

Toda vez que toda decisión judicial de declarar la ineficacia de traslado, repercute, en que se crea de manera injustificada y desproporcionada una obligación (con efectos patrimoniales) en cabeza de Colpensiones, quien administra los aportes de millones de pensionados y afiliados, y dicha medida para restablecer los derechos del afiliado, no pasaría el segundo criterio de la “necesidad”, toda vez que si existen otros medios menos lesivos para mantener los derechos del afiliado, y es que quien se deba hacer cargo de las prestaciones económicas que se deriven de la ineficacia sea la AFP, quien ha administrado dichos recursos y ha generado los respectivos rendimientos, así mismo, al ponderar los bienes jurídicos en tensión.

Página / 9

De ahí que, poner en cabeza de COLPENSIONES dicha responsabilidad, tiene un impacto más lesivo para la sostenibilidad financiera del sistema, evaluando diferentes variables, tales como:

i) Que Colpensiones, siendo pública, es la única administradora del RPM, que alberga un mayor número de pensionados cuyas pensiones se reconocen con subsidio de las arcas del Estado, de forma tal, que se estaría solventado con estos recursos, el desmedro económico ocasionado por particulares (AFP privadas). Finalmente., en caso de no aceptarse la tesis de la inoponibilidad frente al tercero de Buena Fe (COLPENSIONES), se debe evaluar por los jueces la proporcionalidad de la medida que se adopta con la ineficacia del traslado, y ponderar los bienes jurídicos en tensión, para adoptar otra medida, consistente en que sea la AFP quien asuma las cargas económicas, o que los dineros que se trasladen al RAIS, los devuelva conforme a un estudio actuarial que determine que con ellos se cubre en su integridad la prestación en los términos actuariales previstos para el RPM.

**IMPROCEDENCIA PARA DECRETAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN O INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN**

La Circular 019 de 1998 emitida por La Superintendencia Financiera de Colombia estableció que cuando el afiliado decida trasladarse de régimen o de administradora, expresará su voluntad mediante el diligenciamiento del correspondiente formulario ante el empleador o ante la nueva entidad administradora, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre el particular.

Es por ello que la solicitud realizada por la accionante a la AFP, fue realizada de manera directa y voluntaria ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen, de conformidad con lo establecido en la ley 100 de 1993, Artículo 13 Literal B. Por lo anterior, dicha AFP debió indicar los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisión, ya que al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy en Liquidación allegaba el formulario de la nueva AFP escogida por el ciudadano indicando el cumplimiento de la solicitud de traslado.

Sin embargo, el 23 de octubre del 2015 se firmó el Decreto 2071 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual dice que las administradoras de pensiones deben proporcionar a los afiliados información completa de los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes pensionales (de Prima Media o Ahorro Individual). Los afiliados podrán ir a cualquiera de las oficinas de Colpensiones y de los fondos privados o podrán ingresar a la página web donde hay información sobre

los regímenes o pueden comunicarse telefónicamente para saber a dónde dirigirse y buscar la asesoría.

Lo anterior, teniendo en cuenta la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, mediante la cual se establecen los mecanismos para que tanto las AFP como Colpensiones realicen dicha asesoría a partir de 01/10/2016 a las mujeres de 42 años o mayores, y hombres de 47 años o mayores, desde dicha fecha los ciudadanos no se podrán trasladar de Régimen sin antes haber recibido dicha asesoría, por lo cual dicha restricción NO ES RETROACTIVA y comienza a regir a partir de la fecha dispuesta por la Superintendencia Financiera.

Página / 10

Una vez verificada la información que se registra en nuestras bases de datos y en la base de datos de Sistema de Información de Administradoras de Fondos de Pensiones - SIAFP, se visualiza que el demandante citado en la referencia figura válidamente afiliada a una Administradora de Fondos de Pensiones – AFP.

En cumplimiento a la Ley 797 de 2003, artículo 2º, literal E: "Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez".

Por lo anterior, frente a la pretensión de traslado de régimen, no sería procedente dado a que su poderdante se encuentra a menos de 10 años de adquirir el Derecho a su Pensión, ahora bien bajo el entendido que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste en cualquier tiempo, conforme a los términos señalados en la Sentencia Unificada 062 de 2010.

Por otra parte, es necesario que se tenga en cuenta que solo podría la anulación del traslado efectuado hacia la Administradora de Fondos de Pensiones AFP y su retorno al Régimen de prima media, si:

a) Su firma ha sido falsificada en el contrato de afiliación, situación en la cual debe instaurar la respectiva acción penal por la presunta falsificación en documento (público o privado) ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar la veracidad o falsedad del documento, de conformidad con lo establecido en el Título IX Capítulo III de la Ley 599 de 2000 referente a los delitos contra la fe pública, en especial a la falsedad en documentos. Una vez la autoridad competente se pronuncie sobre el asunto, el ciudadano o la AFP respectiva podrán solicitar la anulación del traslado diligenciando los formularios de la Entidad y allegando copia del respectivo informe grafológico.

b) El empleador lo afilió sin su consentimiento: El formulario de afiliación no fue firmado por el afiliado.



c) Traslado de Régimen por sentencia SU 062 de 2010: en el cumplimiento de las condiciones y requisitos señalados.

Sin embargo, ninguna de estas causales se vislumbra dentro del acápite de los hechos de la demanda y solo arguye la información inadecuada y poco veraz, las cuales deberán ser objeto de debate probatorio.

Página / 11

El demandante intentó su traslado del RAIS al RPM, faltándole menos de 10 años para el cumplimiento de la edad mínima.

De igual manera carece de los presupuestos exigidos en la SU-130 de 2013 emanada de la Corte Constitucional.

Respecto del aspecto subjetivo de que trata el artículo 72 modificado por la L. 795 de 2003, art. 12 literal F y art. 97 modificada L. 795 de 2003 art. 23, sobre los deberes de informar a los afiliados ante una información inadecuada y poco veraz, aspectos que deben ser probados por la parte actora y sopesados por el Juez natural, como también ajenos a COLPENSIONES.

Es cierto que para la fecha de traslado el demandante plasmó su firma en el formulario y siendo este una persona legalmente capaz, debe entenderse que este acepto cada una de las condiciones ofrecidas, en consecuencia, no es dable años después venga a mostrar su inconformidad, más aún cuando tuvo la posibilidad de tener re-asesoría por parte del fondo privado que demuestra haber estado de acuerdo y satisfecha con lo que ese fondo privado le ofrecía.

Ahora bien, el Decreto 3800 de 2004, artículos 1° y 2°, inciso segundo y que a la letra dice:

Artículo 1°. Traslado de Régimen de Personas que les falte menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, las personas a las que, a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha.

Artículo 2°. Casos de múltiple vinculación. En el evento en que las personas a que se refiere el artículo anterior se encuentren en situación de múltiple vinculación de régimen ante las administradoras del Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, deberán elegir el régimen al cual deseen estar vinculados.

Las personas a las que se refiere el artículo anterior, que no manifiesten su voluntad de afiliación de administradora o selección de régimen, se entenderán vinculadas a la entidad a la que se encontraran cotizando a 28 de enero de 2004 o a aquella que recibió la última cotización antes de dicha fecha. (Resalto mío).

La H. CORTE CONSTITUCIONAL en sentencia C-1024 de 2004 se manifestó en los siguientes términos:

“De suerte que, a juicio de esta Corporación, siendo el derecho al régimen de transición un derecho adquirido[16], no puede desconocerse la potestad reconocida a las personas previstas en las hipótesis normativas de los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media

con prestación definida y, por lo mismo, hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en las E disposiciones que le resulten más benéficas, conforme lo expuso esta Corporación en Sentencia C-789 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

Por lo anterior, se declara exequible el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el siguiente aparte previsto en el literal e), a saber:

Página / 12

“Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (...)”, exclusivamente por el cargo analizado en esta oportunidad y bajo el entendido que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados en la sentencia C-789 de 2002”.

Debe tenerse en cuenta además que la Corte Constitucional avalo la coexistencia de ambos regímenes, esto es el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Además, el mismo tribunal con sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, ya había considerado válida la pérdida del Régimen de Transición para las personas que se habían traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, excepto para las personas que tuvieran 15 años de servicios a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, pero como ya se mencionó, no es el caso de la actora.

Por último, la eventual afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media y el traslado de los aportes al régimen en mención, dependen de la decisión favorable que previamente obtenga la accionante respecto de la pretensión de declaratoria de nulidad de la afiliación y traslado realizados al Régimen de Ahorro Individual.

A la fecha, el traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual tiene plena validez y respecto a la nulidad del contrato alegada por el interesado, deberá probarse en el desarrollo del proceso judicial.

Mientras no se verifique además que la demandante completa los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez tal como lo solicita con la presente demanda, esto es, que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, no hay lugar al reconocimiento del derecho por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones por cuanto se presentó un traslado de Régimen de la accionante del RPM al RAIS.

#### **INEXISTENCIA DE VICIO EN EL CONSENTIMIENTO**

El artículo 12 de la ley 100 de 1993 prevé la existencia de dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, esto es: Régimen de Prima Media con Prestación Definida y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Para la selección de alguno de los regímenes mencionados, es perentorio atender las directrices previstas en el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993, las cuales, básicamente consisten en una elección libre y voluntaria por parte del afiliado.

Es sabido el hecho que ambos regímenes garantizan el derecho fundamental a la pensión, no obstante, entre uno y otro existen diferencias para el reconocimiento de ésta, veamos:

1. En el régimen de prima media básicamente y de acuerdo al artículo 33 de la ley 100 de 1993, se es necesario acumular única y exclusivamente, las semanas de acuerdo a la anualidad en la que se pretende adquirir el derecho y la edad. No tiene garantía de pensión mínima. Para el cálculo de las mesadas pensionales por vejez, se tiende lo dispuesto en el artículo 21 del mismo estatuto de la Seguridad Social.
2. Mientras, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se hace necesario para que un afiliado adquiera el derecho a la prestación económica de vejez, se hace acumular un capital suficiente que le permita obtener una pensión mensual equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente.

Página / 13

En el RAIS, a diferencia de lo que sucede en el RPM, se tiene Garantía de Pensión Mínima, derecho que consiste en que aquel afiliado que no cumpla con el capital suficiente para adquirir el derecho a la pensión de vejez, pero acumula un mínimo de 1150 semanas de cotización al sistema general de pensiones, podrá adquirir el derecho a la prestación; existe además la garantía de la rentabilidad mínima, vigilada por la Superintendencia Financiera y en la que se prevé que siempre será positiva; y en caso de inexistencia de beneficiarios para efectos de la pensión de sobrevivientes, las sumas acumuladas en la cuenta de ahorro pensional, harán parte de la masa sucesoral del causante; sistema multifondos.

Son beneficios en el régimen de ahorro individual que el régimen de prima media con prestación definida no tiene, que dan lugar a considerar que es un régimen benévolo con sus afiliados, de una selección voluntaria y libre en busca de un mayor enriquecimiento económico de acuerdo al mercado de valores u optimización en el tiempo de adquirir la pensión. Es por ello, que no puede hablarse de un ERROR por falta al deber profesional de información con el que cuentas las AFP, pues se considera grosso modo un modelo pensional que garantiza la pensión mínima, sus afiliados pueden pensionarse con años de anterioridad al régimen de ahorro individual, los dineros depositados en las cuentas de ahorro individual pueden pertenecer a la masa sucesoral lo que no ocurre en el RPM que se trasladan es al fondo común en caso de ausencia de beneficiarios, etc.

Ahora bien, la parte débil en el caso sub examine debe ser considerada como quien carece de capacidades para ilustrarse y asesorarse de la menor manera y no como una persona per se vulnerable que está imposibilitada de tener un entendimiento mínimo del sistema, incapaz de realizar actividades orientadas a instruirse mejor e incompetente para aportar pruebas que expongan la existencia de un vicio en el consentimiento. La corte Constitucional en tal sentido (sentencia T 422 de 2011) indicó que en materia de traslado la libertad de escoger el régimen pensional debe verse menguada o adolecer de algún vicio en el consentimiento, y solamente cuando los hechos de la controversia permitan dilucidar que la persona era una parte débil debido a su calidad y escasos conocimientos puede procederse con un regreso automático. Así pues, dicha providencia amparó los derechos de un ciudadano campesino analfabeta:

“Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de esta controversia, la afirmación del actor resulta creíble; en efecto, que los aportes objeto del traslado fueran posteriormente devueltos por parte de Skandia al ISS, sin conocimiento ni autorización del actor, es un hecho que no contrasta con el hallazgo de esta Sala, consistente en considerar que para el afiliado era muy difícil comprender las implicaciones del documento que firmaba, “Afiliación Fondo de Pensiones Obligatorias”, debido a sus bajos conocimientos educativos y al nivel de pensamiento concreto a que se refirió el diagnóstico psicológico.

Página / 14

Con fundamento en lo anterior agrega la Corte que en ese caso específico no será necesario examinar si se presentó un vicio del consentimiento o al menos fuerza con capacidad de viciarlo:

Por considerar suficiente la razón anterior, la Sala no encuentra necesario dilucidar si al momento de firmar el formulario de afiliación con la AFP Skandia al régimen de ahorro individual con solidaridad, se presentó algún vicio del consentimiento o al menos fuerza moral que haya podido viciarlo; lo anterior se afirma por la sensación que puede tener un campesino sin mayor preparación académica, al momento de celebrar un contrato de trabajo, de lo que podría ocurrir si no llegara a firmar la documentación que le presentan y por la ausencia de espontaneidad en la suscripción del formulario.

La Corte indica la necesidad probatoria de establecer la existencia de un vicio, fuerza o dolo al momento de trasladar a un afiliado, de inclusive analizar la calidad del demandante y de analizar cada caso particular según los hechos y circunstancias. Sin embargo y como se dijo en precedencia, son beneficios en los que los afiliados vieron una oportunidad mayor en este régimen pensional, por lo que no puede hablarse de un vicio en el consentimiento en los términos del artículo 1510 del Código Civil, pues tal error no existe en el presente asunto.

### **IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS**

En cuanto a los intereses moratorios, tenemos que los mismos se encuentran establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, así:

*“INTERESES DE MORA. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.*

Es preciso considerar que el interés de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no opera de pleno derecho. De este artículo se desprende que para que proceda el pago de los intereses moratorios allí consagrados, es necesario que concurren dos requisitos a saber: el primero que exista una pensión legalmente reconocida y que la administradora encargada de efectuar el pago haya incurrido en mora en el pago de la mesada pensional, situación que no operó en el caso objeto de controversia, según las pruebas aportadas.

Por lo anterior, no hay lugar al reconocimiento y pago de intereses moratorios.

Es importante señalar señor Juez que, en el evento de acceder a la pretensión de intereses moratorios, estos solo se causan a partir del sexto mes siguiente a la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional.

Respecto a la debida interpretación del plazo con que cuentan las autoridades Sostuvo la Corte Por medio de la sentencia T-588 de 2003, lo siguiente:

Página / 15

“Para fijar cuál es el término que establece la ley para resolver sobre las peticiones relacionadas con las prestaciones de la seguridad social en pensiones, y en este sentido definir cuál es exactamente el contenido del derecho fundamental de petición en este punto, la Corte ha recurrido a una interpretación integral de tres normas diversas pero que concurren a la configuración legal del derecho de petición. Estas normas están contenidas en el artículo 6º Página 9 de 17 del C.C.A., en el artículo 19º del Decreto 656 de 1994 y en el artículo 4º de la ley 700 de 2001, cuyos textos son los siguientes:

(...) Ahora, para determinar cuál es el contenido del derecho de petición en materia de pensiones, la Corte ha tenido que fijar el alcance del enunciado del artículo 4º de la ley 700 de 2001. Para ello la Corte ha recurrido a una interpretación sistemática de las normas que regulan el ejercicio del derecho de petición en materia de seguridad social en pensiones (CCA, Decreto 656 de 1994 y ley 700 del 2001), y a una interpretación literal del enunciado del referido artículo 4º. Sobre el punto, en la sentencia T-001 de 2003 la Corte afirmó:

(...) Como se observa, el máximo plazo para decidir o contestar una solicitud relacionada con pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia es de cuatro meses. Hasta el momento no hay norma alguna que fije un término diferente para la respuesta a la solicitud en materia de pensión para las sociedades administradoras de fondos del régimen de ahorro individual, para el Seguro, o para Cajanal. En consecuencia, se debe seguir aplicando por analogía el artículo 19º transcrito.

(...) Obsérvese cómo el artículo 4º (de la ley 700 de 2001) establece un término de seis meses no para decidir sobre las solicitudes en materia de pensión, como lo hace el artículo 19º del Decreto 656 de 1994, sino para adelantar los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de las mesadas; es decir, para el desembolso efectivo del monto de las mismas.”

De lo anterior se sigue que, cuando el derecho de petición es ejercido frente a entidades o personas a cuyo cargo existe la obligación de reconocimiento y pago de pensiones, los términos constitucionales para resolver sobre las peticiones son los siguientes: (i) de quince días hábiles (cuando se trata de recursos en el trámite administrativo o de peticiones de información general sobre el trámite adelantado), (ii) de cuatro meses (cuando se trata de peticiones enderezadas al reconocimiento de pensiones) y (iii) de seis meses (cuando se trata de peticiones o de trámites enderezados al pago efectivo de las mesadas).

En este sentido existe un deber constitucional, derivado del derecho fundamental de petición, que pesa sobre las personas o entidades responsables del reconocimiento y pago de pensiones el cual comporta: (i) responder diligentemente las peticiones presentadas respetando los términos previstos por la ley, (ii) informar sobre el trámite a las personas que acuden a sus dependencias mediante peticiones respetuosas y (iii) efectuar los pagos, cuando en derecho haya lugar, antes de que



se cumplan los 6 meses previstos en la Ley 700 de 2001, que precisamente fijó condiciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los pensionados. La sentencia C- 065 de 2004 precisó:

“De cuatro (4) meses para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional (reconocimiento de pensiones de vejez e invalidez, así como las relativas a reliquidación y reajuste de las mismas). (Decreto 656 de 1994, artículo 19 y Ley 797 de 2003, artículo 9°).

Página / 16

Debe precisarse que el término de cuatro meses no es aplicable en el caso en que se trate del reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto allí opera el término fijado por el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, esto es, máximo "dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho"

En el mismo sentido recientemente la misma Corte Constitucional expuso en la sentencia SU-065 de 2018 recordó que la postura asumida por este organismo en sede de control abstracto y concreto, indica que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los pensionados a quienes se les ha reconocido su derecho prestacional en virtud de un mandato legal, convencional o particular ...por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales; reiterando en este sentido, la causación de dichos intereses a partir de la expiración del plazo de los 6 meses para hacer efectivo el ingreso a nómina y pago de las mesadas pensionales.

Así las cosas los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empiezan a causarse sólo a partir de la fecha en que la norma ordena el desembolso efectivo del monto de la mesada, esto es, a partir del vencimiento de los 6 meses que incluye 4 meses para el reconocimiento más 2 meses adicionales que se tienen para incluir en nómina en lo que respecta para las pensiones de vejez e invalidez; y a partir de los 3 meses que engloba 2 meses para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes más un mes adicional para la inclusión en nómina del solicitante.

#### **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**

Señor Juez, como bien puede deducirse de los documentos aportados con la demanda y de los hechos narrados en ella, la pretensión principal se fundamenta en un engaño, del cual el fondo público no participó de los hechos que son motivo de reproche en el libelo petitorio. Esta discusión es ajena a mi representada. No obstante lo anterior, se considera que no es posible que se declare la nulidad de la afiliación que la parte demandante pretende, ya que no se encuentra prueba idónea alguna que lleve a concluir que el consentimiento del demandante estuvo viciado, al contrario, la afiliación se efectuó de manera válida como se evidencia en los documentos aportados con la demanda emitidos por la AFP PROTECCION S.A con los cuales se le da respuesta a los derecho de petición radicados ante estas entidades por el demandante.

#### **INEXISTENCIA DEL DERECHO DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA ADMINISTRADO POR COLPENSIONES**

Excepción que fundamento en que la vinculación de la demandante a la AFP PROTECCION S.A y , se efectuó con el lleno de los requisitos legales exigidos, - según se desprende del contenido impreso en la respuesta emitida por las Administradoras de Fondos de Pensiones., por lo que la petición solicitada en el escrito de demanda resulta inviable, pues el demandante, de manera libre y voluntaria, en uso de sus facultades legales y en el ejercicio del derecho a la libre escogencia de régimen consagrado en el artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993, decidió afiliarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y someterse a todas las condiciones, exigencias y consecuencias del mismo.

Página / 17

#### **FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR**

No se ha demostrado que la afiliación al Fondo Privado administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones PROTECCION S.A se haya realizado de manera irregular como para declarar que no fue válida y de hecho los actos jurídicos se presumen válidos hasta que sean declarados nulos por vicios en el consentimiento.

Debe decirse que se está hablando de la ocurrencia de un supuesto error que acaeció en el año 2000 es decir 22 años atrás; lo cual, de suyo delimita el tema probatorio, en la medida en que, no se entiende porqué solo después de haber transcurrido el tiempo, considera el actor que se le hizo incurrir en un error, motivo por el cual no puede justificarse la mala administración de la situación pensional o la falta de cuidado y diligencia en él, en un error o en un vicio del consentimiento, el cual a todas luces no acaece para el caso en concreto tratado en esta contestación.

Es decir que, por más agresiva que hubiere sido la oferta del fondo privado, esa conducta se enmarcaba dentro de la dinámica comercial que en el marco de la competencia y la actividad mercantil desarrollan las empresas. Al actor no le era inexorable su afiliación a PROTECCION S.A, por más que se le hubiere vendido la idea de que ese régimen le era más favorable.

Por otra parte, no es posible autorizar el traslado del accionante del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen del Prima Media con Prestación Definida administrado actualmente por Colpensiones, lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo segundo de la Ley 797 de 2003, quienes les faltare menos de 10 años para pensionarse, se encuentran impedidos para efectuar dicho traslado.

#### **FALTA DE INTERES EN SU VIDA PENSIONAL**

Se debe señalar que en el RAIS la pensión es el resultado del ahorro acumulado durante la etapa productiva del afiliado –aportes más rendimientos generados-, que se deposita en una cuenta individual, a nombre de su titular. Dicho afiliado puede solicitar su pensión a cualquier edad o al momento de cumplir la edad de pensión, siempre y cuando disponga de un capital suficiente para financiar una pensión igual al 110% del salario mínimo legal vigente. El monto de la pensión no tiene tope máximo y depende del ahorro acumulado por el afiliado en la cuenta individual.

En caso de no contar con el capital suficiente puede acceder a la Garantía de Pensión Mínima de vejez.

Es así que sí el afiliado interactúa de forma proactiva con el fondo de pensiones, como por ejemplo al realizar cotizaciones voluntarias, o usando las diferentes modalidades para el uso de los ahorros que ofrecen estos fondos, pueden alcanzar la pensión más temprana edad, ya que este régimen les permite incrementar sus saldos en la cuenta de ahorro individual que les permitirá luego financiar su pensión. Es por lo anterior que se señala que podríamos estar no ante una falta de asesoría o un error en el consentimiento, toda vez que la asesoría que señala la parte actora no es falsa, sino que estamos frente a una falta de interés, poca interacción o negligencia por parte de la parte actora en su vida pensional, que si no hubiera existido, hubiera accedido a su pensión con los beneficios señalados por la AFP.

### **BUENA FE DE COLPENSIONES**

Evidenciada en que Colpensiones NO PUEDE válidamente y argumentando motivos de equidad, desconocer la LEGISLACIÓN VIGENTE. Como institución de carácter público, tiene que someterse totalmente al imperio de la ley, pues los servidores públicos no pueden según la Constitución Política de Colombia hacer sino lo que les está expresamente permitido, y entre esas cosas no está tomar decisiones en equidad, lo contrario sería prevaricar; es por lo anterior que cuando Colpensiones niega el traslado lo hace de acuerdo a la ley, cumpliendo así con el principio de la buena fe de la entidad y de la investigación administrativa que hace la entidad.

### **MALA FE/ TEMERIDAD**

Además de señalar que la afiliación a la AFP PROTECCION S.A fue con el lleno de los requisitos señalados por la ley y en ejercicio del derecho a la libre escogencia de régimen consagrado en el artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993. Llama la atención que el demandante nunca velo porque ese traslado se realizara efectivamente, cuando estuvo en término para solicitar el traslado y que solo lo haga cuando observa que su condición de pensionado va a ser menos favorable en el RAIS que en el de RPM. Esto indicando que en verdad el demandante trata de esconder la actitud pasiva y negligente que tuvo frente a su vida pensional con un supuesto vicio en su consentimiento, que hubo al momento de tomar la decisión de cambio de régimen.

### **DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN- SEGUROS PREVISIONALES- COMISIONES. INDEXADOS.**

El inciso 2 del artículo 20 de la ley 100 de 1993, como fuese modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, establece la distribución de los porcentajes de cotización de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, indicando y para los efectos pertinentes, el hecho que un 3% del ingreso base de cotización será destinado “a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes”.

Ahora bien, el artículo 39 del decreto reglamentario 656 de 1994, define a la cuota de administración de la que se apropia la administradora del régimen de ahorro individual “constituyen ingresos de las sociedades que administren fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho”. Determinado a continuación, de manera taxativa, sobre cuales conceptos se podía cobrar las comisiones correspondientes. Debe resaltarse el hecho que antes de la expedición de la ley 797 de 2003, y de conformidad con la Resolución 2549 de 1994, la cuota de administración en favor de éstas entidades lo era del 3.5%.



Y por último, atendiendo el derrotero en virtud de señalar que parte del patrimonio autónomo de las entidades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad se constituye con base en la cuota de administración que se cobra al afiliado al sistema general de pensiones, el literal f del artículo 60 de la ley 100 de 1993, el cual destaca entre otras, las características del RAIS, establece:

- f. El patrimonio de las entidades administradoras garantiza el pago de la rentabilidad mínima de que trata el literal anterior y el desarrollo del negocio de administración del fondo de pensiones.

Página / 19

En ese orden de ideas, se colige sin mayor disquisición el hecho que la cuota de administración que cobra las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, es un INGRESO propio en favor de la generación de su patrimonio, todo ello, en virtud de la afiliación realizada por el cotizante obligatorio al sistema general de pensiones, debiendo destacarse el hecho, que de encontrarse que si la misma se declara INEFICAZ o NULA en virtud a una afectación de la selección libre y voluntaria del régimen pensional o por faltarle a un requisito de existencia o validez, bien sea determinado por el a quo, todo ello en atención a la omisión a las directrices dadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia en sede de casación 31989 del 08 de septiembre de 2008, estos dineros conjuntamente con sus rendimientos, generan un enriquecimiento sin justa causa a su favor y en desmedro de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, pues ella, NUNCA, desde la selección inicial de afiliación al RAIS por parte del afiliado, tuvo en su haber, la destinación o administración de esas sumas dinerarias, las cuales le hubiesen servido a efectos de capitalizar el fondo de naturaleza común.

Sobre la obligatoriedad de los recursos previstos como cuotas de administración, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia reciente, con número de radicación 46292 expediente SL 17595 del 18 de octubre de 2017, Magistrado Ponente Fernando Castillo Cadena, ha sostenido: “La administradora de pensiones del régimen de ahorro individual tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor que fue anulada, con todos sus intereses y rendimientos que se hubieren causado”

Y sobre los demás montos cancelados por el afiliado en razón de la afiliación al RAIS, ha adocinado la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, tanto bien se declare la ineficacia de un acto jurídico o la nulidad de éste, bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás” (CSJ SC3201-2018).

Sobre el particular, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción laboral, en sentencia del 14 de agosto de 2019, radicación 76284, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, expuso lo siguiente:

En la medida que la ineficacia del acto de cambio de régimen pensional supone negarle efecto al traslado, tal situación solo es posible bajo la ficción de que el mismo nunca ocurrió. Luego si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que nunca se cambió al sistema privado de pensiones, y si estuvo afiliado al régimen de ahorro

individual con solidaridad, ha de darse por sentado que nunca se trasladó al sistema público administrado por Colpensiones.

Por esto mismo, la Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)»

Página / 20

Los anteriores conceptos, deberán ser devueltos a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, debidamente indexados al momento del traslado de los recursos correspondientes, atendiendo la fórmula que para los efectos ha previsto Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE, así:

$$VR = VH \times (IPC \text{ actual} / IPC \text{ inicial})$$

VR: corresponde al valor a reintegrar.

VH: monto cuya devolución se ordenó inicialmente.

IPC: Índice de Precios al Consumidor.

### **IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS**

Es evidente que el accionar jurídico administrativo se debe presumir de buena fe, a menos que se demuestre lo contrario, lo que conlleva consecuentemente a la imposibilidad de condenar en costas a mi representada, por lo siguiente: los

artículos 361 y siguientes del C.G.P que es aplicable al procedimiento laboral por remisión expresa del artículo 145 del C. P del T. y de la S.S. que faculta al juez para condenar en costas a la parte vencida, pero en consideración a la conducta asumida por ella, que es una norma procesal de vigencia inmediata según artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en esos términos se ha pronunciado el Consejo de Estado en sentencia del expediente radicado N° 10918 de 1999 con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque, que a su vez cita otra sentencia del mismo ponente radicado N° 10775 y en la cual manifestó:

*“Es claro que el legislador no ha querido en este caso aplicar un criterio absoluto para determinar a cargo de quien están las costas del proceso, y por lo tanto no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de sanción a la parte, sino su conducta abusiva que implique un desgaste innecesario para la administración y para la parte vencedora”*

De otro lado, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés en sentencia del expediente 12736 del año 2000 y más conocida por ser la que cambio la jurisprudencia de la indexación de la primer mesada pensional , claramente se nota que prohija la tesis de la conducta asumida, y no el “pierde y paga” por cuanto dispuso: *“No se condenara en costas al actor ni el recurso extraordinario ni en las instancias, lo primero porque el recurso extraordinario no fue originado por él y lo segundo por ser esta decisión el resultado*

de una modificación de la jurisprudencia que sirvió de fundamento a las pretensiones de la demanda”.

Así las cosas no tiene soporte una condena por este hecho, pues la entidad ha obrado de buena fe, ha contestado en debida forma las solicitudes realizadas por el demandante y más importante aún, no fue participe de ninguno de los hechos que constituyen la presunta nulidad de la afiliación del demandante a la AFP PROTECCION S.A, además la entidad no puede ejecutar hechos prohibidos por las leyes y menos violar sus propios reglamentos al multiafiliar una persona sin que dicho traslado sea válido, como en el caso concreto de este proceso.

Página / 21

### **PRESCRIPCION**

Si tomamos en cuenta que la prescripción es aquel fenómeno por el cual se extinguen los derechos y prescribe las acciones por el transcurso del mismo, tal como se encuentra establecido en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en armonía con los artículos 2512 y 2535 del Código Civil, en el caso de que se resolviera acceder a las pretensiones del demandante, ruego sea tomada en cuenta la prescripción de todas las acciones y derechos que hubieren sufrido este fenómeno en virtud del transcurso del tiempo.

Ahora frente a la solicitud de declaración de nulidad ó ineficacia se debe de separar la figura en sus dos categorías, que se explican en el artículo 1741 del Código Civil, la nulidad absoluta en los actos y contratos que devienen por ser realizados por personas absolutamente incapaces. Es así que cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.

Es así que podemos establecer que la nulidad solicitada es la relativa toda vez que, entre los vicios que se ven afectados por la nulidad relativa se encuentran los vicios del consentimiento y son los que precisamente debe demostrar la parte demandante, recordando que es esta quien tiene la carga de la prueba.

Ahora se debe de señalar que la nulidad relativa puede sanearse de dos formas, siendo una de ellas la convalidación por las partes y la segunda por el paso del tiempo, es decir la prescripción, pues según el art. 1743 del CC, puede sanearse en cuatro años, es decir, que, vencido este lapso computado desde su término de partida, el acto se convalida y la nulidad de que adolecía desaparece y ya no puede ser alegada ni por acción ni por excepción.

Es así que se debe de tener en cuenta que la suscripción de formulario de afiliación constituye un acto jurídico y sus vicios pueden sanearse por el paso del tiempo, pues conforme a lo establecido en el artículo 1750 del Código Civil, los vicios del consentimiento que dan derecho a la rescisión del contrato o acto jurídico tienen un término de prescripción especial de 4 años, contados si es por error o dolo, desde el día de la celebración del contrato o acto, en este caso, el traslado se verificó por suscripción del formulario el año 2000 podía entonces haber demandado la parte actora la nulidad por vicios del consentimiento hasta el año de 2004 respectivamente, sin que se ejerciera la correspondiente acción, sin embargo, desde el momento de suscripción del traslado hasta la presentación de la demanda en el año 2021 han pasado 21 años.

## **COMPENSACIÓN**

En caso de prosperar alguna de las pretensiones solicitadas por la parte demandante, le solicito tomar en cuenta cualquier suma de dinero recibida por ésta de parte de la entidad que represento y lo que llegare a resultar en caso de ser condenada la entidad, lo anterior para efectuar la compensación con lo que pudiere corresponder.

Página / 22

## **FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO**

Ley 100 de 1993 establece la responsabilidad de cada administradora frente al régimen que administra sea, COLPENSIONES el de prima media con prestación definida o el de ahorro individual tratándose de las administradoras privadas. En consecuencia, si la AFP privada comete yerros en la afiliación u omite el debido cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, no tiene por qué afectar a TERCEROS DE BUENA FE como COLPENSIONES, para quien el acto jurídico del traslado en el que por demás no intervino COLPENSIONES, debe producir los efectos y ser la AFP privada la que en un todo por todo salga a responder por la culpa de haber desinformado al usuario del sistema financiero y social.

Es así como la AFP privada responde con su patrimonio por la omisión del deber de información que se demuestre haber incumplido, pero que, por el mismo es totalmente ajeno a COLPENSIONES, entidad que no tiene por qué ser llamada a responder patrimonialmente, menos aún si se trata de un fondo común que involucra dineros públicos.

Al momento de aceptar su ingreso al fondo la jurisprudencia ha definido que las administradoras de pensiones tienen la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información suficiente y transparente que le permita al afiliado elegir entre las diferentes opciones, la que mejor se ajuste a sus intereses; por cuanto, no puede alegarse «que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito» (CSJ SL12136-2014).

Así mismo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1688-2019, luego de realizar un recuento normativo, concluyó que “las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional”

De otra parte, se debe considerar que se ha desconocido el precedente constitucional al valerse de manera generalizada de la presunta ignorancia de la ley por parte de los afiliados, para considerarlos como parte débil y en consecuencia legos o inexpertos, desconociendo adicionalmente que el error de derecho no es justificable en los negocios jurídicos, menos para buscar un aprovechamiento pensional.

Es así como la posición de la CSJ no es de recibo de la totalidad de los Magistrados de la misma, por cuanto en reciente pronunciamiento dentro del radicado 68852, el

Magistrado Jorge Luis Quiroz aclaró su voto, que COLPENSIONES acoge en su defensa, y que en su tenor literal manifestó:

“... el acto de traslado, si bien impone un deber de información suficiente de parte de las administradoras, ello, per se, no exonera al afiliado del deber de concurrir suficientemente ilustrado a la escogencia de su régimen pensional, de la cual dependerán sus expectativas económicas y de plazo para acceder a la por vejez; como tampoco lo sustraen de la aplicación de la ley, para darle un tratamiento desigual, como si su capacidad para celebrar actos y contratos estuviera menguada frente a la definición de un acto de la mayor importancia, en la medida en que de su elección dependerán las condiciones de cubrimiento de las contingencias, amparadas por el sistema de seguridad social y en particular la de vejez.

Agregó el magistrado Quiroz que la condición del promotor de la acción de nulidad merece una especial atención, pues “... es lo mismo que el ex ministro de hacienda que participó en la construcción de las reglas acuda a solicitar la nulidad, frente a la solicitud que haga un iletrado campesino cuya imposibilidad de leer lo haya llevado a un traslado de régimen y pretenda su nulidad por vicio del consentimiento.

En la Sentencia C-596 de 1997 la Corte Constitucional estudió una demanda dirigida contra la expresión “al cual se encuentran afiliados” contenida en el inciso segundo del art. 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se acusó de desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral, colocar en situación desventajosa a las personas que se encontraban en el régimen de transición y violar el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, al respecto la Corte expresó: “Justamente por cuanto los derechos a la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como si sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación, para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho. (...) Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las simples expectativas de derecho.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Posteriormente, a través de la providencia C-789 de 2002, la Corte Constitucional resolvió la demanda presentada por un ciudadano contra los incisos 4 y 5 del art. 36 de la Ley 100 de 1993. En la sentencia, la Corte precisó el alcance de derechos adquiridos y meras expectativas en materia pensional, indicando lo siguiente:

“La Sala Plena consideró que las disposiciones demandadas se ajustaban a la Constitución puesto que, en primer lugar, el derecho a obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino “apenas una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad”.

En segundo lugar, indicó que ni siquiera puede afirmarse que las normas acusadas frustren tal expectativa ya que sólo:



“se podría hablar de una frustración de la expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo”.

Por último, precisó que:

Página / 24

“la protección constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios considerados como mínimos no se refiere a las expectativas legítimas, sino a aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus titulares”,

Razón por la cual tal prohibición no aplica en este caso al tratarse de expectativas legítimas y no de derechos adquiridos”.

Adicionalmente, las sentencias C-1024 de 2004, y SU-062 de 2010, de la Corte Constitucional en materia de traslados, indican que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.

Así mismo, dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que:

“el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato”

Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales, acompasado ello con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, relativo a la obligatoriedad de cuidar y asegurar la sostenibilidad del sistema pensional.

Es claro señor Juez que según los parámetros normativos establecidos en el artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993, los afiliados tienen el derecho a seleccionar cualquiera de los regímenes previstos en el artículo 12 del mismo estatuto legal, de una manera libre y voluntaria, la cual se materializará al momento de la vinculación a una administradora determinada a través de los medios que disponga cada entidad para tales efectos, tal como lo hizo en su momento, el demandante ante la AFP. Adicionalmente, la demandante no hizo uso del derecho que tenía de retractarse de la afiliación a la AFP., de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1161 de 1994. Tampoco manifestó su deseo de retornar al Régimen de Prima Media con prestación definida administrado por mi representada, en los términos establecidos en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 3800 de 1994, preceptiva normativa que fue ampliamente divulgada por el entonces Instituto de los Seguros Sociales y por los fondos privados de pensiones.

En ese sentido, la falta de manifestación del demandante en los términos y condiciones establecidos en las normas precitadas, conlleva necesariamente a deducir que su vinculación al Régimen de Ahorro Individual, se encuentra

legalmente vigente. De manera que dicha vinculación no obedece a una conducta arbitraria o engañosa, si no, en primer lugar, a la falta de manifestación de voluntad de la propia demandante de retornar al Régimen de Prima Media con Prestación definida administrado por mi representada y, en segundo lugar, por no haber diligenciado solicitud de vinculación cuando le faltaban más de 10 años de edad para arribar a la edad de pensión, según lo prescrito en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003. Así las cosas, el Decreto 3995 de 2008, en su artículo 12, prescribe la posibilidad de traslado de régimen de aquellas personas que les faltaren menos de 10 años para arribar a la edad de pensión, como lo es el caso del demandante, evento en el cual se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la sentencia C-789 de 2002 y C- 1024 de 2004, es decir, si a primero de abril de 1994, el afiliado contaba con más de 15 años o más de servicios cotizados, su traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, podría efectuarse en cualquier tiempo. Como en el caso objeto de controversia no se verifican tales presupuestos normativos, quiere ello decir que el demandante se encuentra debidamente afiliado al Régimen de Ahorro Individual, con la AFP seleccionada, por lo que mi representada no estaría legitimada en la causa por pasiva para atender las pretensiones que fueron deprecadas en el escrito promotor de este proceso. Por otro lado, la responsabilidad legal, consagrado en el artículo 10 del decreto 720 de 1994. Responsabilidad de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones (...). Responsabilidad de los promotores cualquier infracción error u omisión – en especial aquellos – en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora respecto de la cual adelanta sus labores de promoción o con la cual, con ocasión a su gestión se hubiere realizado la respectiva vinculación, (...) ”

El período de carencia previsto en la norma demandada no vulnera el derecho a la igualdad, ni ningún otro principio o derecho fundamental que emane de las relaciones de trabajo, básicamente por las siguientes consideraciones. Para esta Corporación, el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir

al establecimiento de una diversidad de trato entre sujetos puestos aparentemente en igualdad de condiciones, tales como, el señalamiento de límites para hacer efectivo el derecho legal de traslado entre regímenes pensionales. Ahora bien, la Corte ha sostenido que dicha diversidad de trato no puede considerarse per se contraria al Texto Superior, pues es indispensable demostrar la irrazonabilidad del tratamiento diferente y, más concretamente, la falta de adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida en el logro de un fin constitucionalmente admisible.

Desde esta perspectiva, el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de suspensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner

en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes. No sobra mencionar en este punto, que el sustento actuarial es el que permite asumir los riesgos que se encuentran involucrados con el sistema y que, en ese orden de ideas, su falta de ajuste con la realidad económica del país, simplemente podría llegar a poner en riesgo la garantía del derecho pensional para los actuales y futuros pensionados.

Frente a Colpensiones, no puede solicitar de nuevo la afiliación de conformidad con el artículo 1750 del Código Civil Colombiano al demandante, se le venció el plazo para pedir la rescisión de la afiliación al fondo privado, expresamente esta norma jurídica consagra el plazo es cuatro años. La sentencia C1024 del 2004 declaró exequible el artículo 2 de la ley 797 del 2003 literal e expresa: "En el presente caso, la medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. Así las cosas, el período de carencia o de permanencia obligatoria, permiten, en general, una menor tasa de cotización o restringe la urgencia de su incremento, al compensar esta necesidad por el mayor tiempo que la persona permanecerá afiliado a un régimen, sin generar los desgastes administrativos derivados de un traslado frecuente y garantizando una mayor utilidad financiera de las inversiones, puesto que éstas pueden realizarse a un largo plazo y, por ello, hacer presumir una creciente rentabilidad del portafolio conformado por la mutualidad del fondo común que financia las pensiones en el régimen de prima media con prestación definida.

### **PROCESOS DE INEFICACIA CON PENSION RECONOCIDA**

El proceso que nos convoca es precisamente el de un pensionado y ante la realidad irrefutable de que los casos de ineficacia avasallan los despachos judiciales, proyectándose en el entorno social y económico del país, resulta menester para la judicatura recordar que los jueces no operamos en laboratorios cerrados al mundo, buscando la perfección del silogismo normativo, sino que, por el contrario, modificamos con cada providencia una realidad. Estamos en un escenario como el descrito por Neil MacCormick, parafraseado por Mario Ruiz Sanz:

En este sentido, si un juez dispone de dos o más razones consistentes y coherentes dentro de un sistema normativo, desde el punto de vista justificatorio todas ellas son igualmente correctas. Así, pues, para optar racionalmente en un caso controvertido, el juez debe recurrir en última instancia a argumentos consecuencialistas. La concepción consecuencialista de MacCormick, sostiene Manuel Atienza, citado por Ruiz Sanz:

...puede resultar compatible con la idea de que para justificar las decisiones judiciales se utilizan dos tipos de razones sustantivas: razones de corrección (una decisión se considera correcta en sí misma) y razones finalistas (una decisión se



justifica porque promueve un cierto estado de cosas que se considera valioso). Si las razones de corrección no son suficientes para justificar una decisión, hay que recurrir a razones finalistas o consecuencialistas que contemplen el sentido último de la norma de acuerdo con los principios y valores básicos de cada ordenamiento. Viene a colación la referencia al consecuencialismo, porque resultaría posible darle continuidad a lo razonado por la Sala Laboral de la Corte para declarar la ineficacia de los traslados al RAIS en el caso de los afiliados y hacerlo extensivo a quienes ya se han pensionado en los fondos privados. Probablemente necesitaría un menor esfuerzo argumentativo plegarse a las razones de nuestro tribunal de cierre y seguir fallando en cascada idénticamente los casos de afiliados y de pensionados.

Pero las calidades de afiliado y pensionado ya han sido deslindadas por la Corte Constitucional, precisamente en un fallo con un claro enfoque consecuencialista. Al examinar la exequibilidad del artículo 107 de la Ley 100 de 1993, que limitaba la posibilidad de los pensionados de trasladarse entre administradoras, la Corte arguyó lo que se esbozará enseguida. Esta es la disposición

Art. 107. CAMBIO DE PLAN DE CAPITALIZACIÓN O DE PENSIONES Y DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora.

El Tribunal constitucional profirió la sentencia C-841 de 2003, en la cual abordó dos problemas jurídicos, a saber:

1. ¿Es contrario al principio de igualdad que se permita a los afiliados, pero no a los pensionados, trasladarse entre administradoras de pensiones?
2. ¿Vulnera el derecho a la seguridad social de los pensionados que se les impida escoger la entidad administradora de pensiones o plan de capitalización que les resulte mejor administrativa o financieramente, siendo ya pensionados?

La Corte, ante la acusación de que la norma contenía un trato discriminatorio, realizó el correspondiente test de igualdad, entendiendo que: ...la Constitución atribuyó al legislador la función de configurar el sistema de pensiones, y le otorgó un margen amplio para hacerlo, a fin de garantizar que el sistema cuente con los “medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante,” y su prestación se haga de conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la Carta.

Encontró además que los fines perseguidos por el legislador eran legítimos e importantes, en tanto Tal como se señaló anteriormente, el artículo 107 de la Ley 100 de 1993 busca alcanzar al menos dos fines claramente identificables: (i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii) asegurar la estabilidad financiera y la rentabilidad de las inversiones de la entidad administradora o aseguradora. Estos dos fines están estrechamente ligados a los fines constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad que orientan la prestación y ampliación de la cobertura de la seguridad social, en general, y del sistema general de pensiones, en particular. Por ello, garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente y asegurar la estabilidad y la sostenibilidad del

sistema, constituyen fines legítimos y constitucionalmente importantes en un Estado Social de Derecho como el colombiano.

Halló también que el medio elegido por el legislador resultaba idóneo para el logro de los fines perseguidos, pues Permitir el traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez se ha adquirido la calidad de pensionado puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de inversiones de mediano y largo plazo, dado que la posibilidad de traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado.

Página / 28

La pregunta que lógicamente ha de plantearse este Tribunal es si la prohibición de movilidad para pensionados que el legislador estableció y la Corte Constitucional prohibió, en el caso citado para trasegar dentro del régimen de ahorro individual, no tendrá aún mayor entidad para los asuntos como en el de la ineficacia, donde la orden que finalmente contienen nuestras sentencias es la de inscribir al demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Esto es, mutar su régimen pensional.

La prohibición de traslado para quienes les faltaren menos de diez años para pensionarse, introducida en la ley 100 por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, también fue avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C1024 de 2004, con consideraciones que, si bien se referían a una norma posterior, reafirman la pertinencia de esas limitaciones a la movilidad entre regímenes. Como en el caso de la C-841 de 2003, la norma aquí demandada también superó el test de proporcionalidad y abundaron en ella motivaciones claramente consecuencialistas. Este párrafo abunda en estas últimas:

Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en: “obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social. Este principio en materia pensional se manifiesta en el logro de la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar ‘el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’, en los términos previstos en el artículo 53 del Texto Superior”

Ahora bien, esta última cita no propugna porque se siga el tenor de la norma demandada, pues claramente los fallos sobre ineficacia de los traslados realizados al RAIS por los afiliados en los que resulta pacífica la posición de este Tribunal riñen con su contenido. Tan solo se trae a cuento para reafirmar la mirada claramente finalista de la Corporación de cierre en materia constitucional.

Nada nos impide, pues todos los jueces al fin de cuentas somos jueces constitucionales, situarnos en esa perspectiva y entender con MacCormick que ante

dos soluciones igualmente “consistentes y coherentes”, se opte por la que menos impacto negativo genere en el sistema. Y resulta una verdad incontestable que una declaratoria masiva de ineficacias de la afiliación de pensionados en el régimen de ahorro individual y el correspondiente traslado COLPENSIONES, generaría una suerte de tsunami financiero (e incluso administrativo) sobre todo el sistema pensional, sobre el Estado mismo, garante final de su subsistencia. Y sobre cada colombiano.

Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia, los artículos 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993, permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.

Este Tribunal, a través de su Sala Primera de Decisión Laboral, con ponencia del Magistrado Hugo Alexander Bedoya Díaz, realizó una fértil distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar la pensión, que refuerza la razonabilidad del enfoque que en el caso que nos ocupa. Dice así la providencia, con radicado 00873, proferida el 18 de septiembre de 2018, que constituye un comienzo de precedente horizontal:

Ahora, retrotrayéndonos al estudio de la improcedencia de que se declare la inexistencia del traslado en este caso en particular, la sala se remite a la sentencia SL17595-2017 con radicado 46.292 MP Dr. Fernando Castillo Cadena en donde en forma concreta se dijo “... Así, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (...)”, entendiéndose con este último aparte de la providencia que si la información exigida data desde antes de la afiliación y hasta las condiciones del disfrute de la pensión, ello implica, que una vez reconocida la pensión de vejez esa falta de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico adelantado por la afiliada y que corresponde a la solicitud de la pensión de vejez a la sociedad PROTECCION S.A y al reconocimiento y pago de la prestación económica, pues solo tenía la posibilidad de alegar la falta de información previo al disfrute de la prestación económica y no con posterioridad a ella, como ocurre en este evento.

Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum :

Cuando se trata de la modalidad de renta vitalicia inmediata, la naturaleza misma del contrato no permitiría el traslado en ningún caso, dado que el afiliado adquiere la condición de pensionado desde el momento mismo en que contrata la renta vitalicia. Este tipo de plan pensional es, por expresa definición legal,<sup>2</sup> un contrato

irrevocable entre el afiliado y una aseguradora, mediante el cual el afiliado adquiere un seguro que le otorga al beneficiario y sus descendientes el derecho a recibir una renta vitalicia mensual. Por su naturaleza, como contrato de seguro que es, los riesgos financieros y de contingencias propias de este tipo de contrato se trasladan a la compañía aseguradora, quien a partir de la celebración del mismo debe hacer las reservas necesarias, adquirir reaseguros y adoptar otras medidas para garantizar la rentabilidad y estabilidad del contrato. Por ello, resulta efectivamente conducente para garantizar la sostenibilidad del sistema y servicios administrativos y financieros adecuados, restringir la posibilidad de traslado en esta modalidad de pensión. De no establecerse esta restricción, ninguna aseguradora aceptaría asumir los costos de una renta vitalicia, si la continuidad de la relación con el beneficiario quedara sometida a su mera voluntad.

Valga también mencionar además las situaciones de quienes se han pensionado anticipadamente y han negociado su bono pensional antes de la fecha de redención normal. Ese tercero inversionista que se ha beneficiado en el mercado de valores, mediante un negocio totalmente legítimo, querrá una respuesta cuando la justicia laboral disponga la anulación de esa transacción.

Estos sería solo dos ejemplos del impacto que en el mundo real tendría declarar la ineficacia de la afiliación de quienes ya se han pensionado en el régimen de ahorro individual. Impacto que responsablemente esta Sala quiere evitar, decidiendo mediante esta sentencia de unificación que no podrá declararse la ineficacia ni la nulidad de su afiliación.

Se tiene que los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tienen origen en el incumplimiento de una obligación por parte de la entidad de seguridad social, luego se trata de una disposición de naturaleza eminentemente sancionadora, en razón a lo cual está condicionada, al examen o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena fe, aspecto este último que no tiene asidero en el plenario.

Con relación a la procedencia de pago de intereses moratorios, la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-15310 (42599) del 5 de noviembre de 2014, señaló:

Sin duda, los intereses moratorios fulminados desde la primera instancia fueron los establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social no hay norma jurídica que consagre esta especie de réditos en caso de tardanza en el pago de una de estas obligaciones. De allí que el ad quem cometió el dislate jurídico que le enrostra la impugnante, puesto que en este caso no se trata de una pensión reconocida con base en la Ley 100 de 1993, ni en el régimen de transición por parte del iss, tal cual lo tiene adoctrinado la jurisprudencia, con mayor razón si las condenas impuestas corresponden a reajustes pensionales. En este ítem se casará la sentencia del Tribunal.

De acuerdo con lo anterior, se establece que para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que regula el caso de los intereses moratorios, únicamente aplica en aquellos eventos en los que se presenta mora en el pago de pensiones causadas en vigencia del sistema general de pensiones cuyo reconocimiento tenga su origen en la Ley 100 de 1993.

En los demás casos, y en aquellos que se refieren a reajustes pensionales, no proceden dichos intereses.

Es importante señalar señor Juez que en el evento de acceder a la pretensión de intereses moratorios, estos solo se causan a partir del sexto mes siguiente a la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional.

Página / 31

Respecto a la debida interpretación del plazo con que cuentan las autoridades Sostuvo la Corte Por medio de la sentencia T-588 de 2003, lo siguiente:

“Para fijar cuál es el término que establece la ley para resolver sobre las peticiones relacionadas con las prestaciones de la seguridad social en pensiones, y en este sentido definir cuál es exactamente el contenido del derecho fundamental de petición en este punto, la Corte ha recurrido a una interpretación integral de tres normas diversas pero que concurren a la configuración legal del derecho de petición. Estas normas están contenidas en el artículo 6º Página 9 de 17 del C.C.A., en el artículo 19º del Decreto 656 de 1994 y en el artículo 4º de la ley 700 de 2001, cuyos textos son los siguientes:

(...) Ahora, para determinar cuál es el contenido del derecho de petición en materia de pensiones, la Corte ha tenido que fijar el alcance del enunciado del artículo 4º de la ley 700 de 2001. Para ello la Corte ha recurrido a una interpretación sistemática de las normas que regulan el ejercicio del derecho de petición en materia de seguridad social en pensiones (CCA, Decreto 656 de 1994 y ley 700 del 2001), y a una interpretación literal del enunciado del referido artículo 4º. Sobre el punto, en la sentencia T-001 de 2003 la Corte afirmó:

(...) Como se observa, el máximo plazo para decidir o contestar una solicitud relacionada con pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia es de cuatro meses. Hasta el momento no hay norma alguna que fije un término diferente para la respuesta a la solicitud en materia de pensión para las sociedades administradoras de fondos del régimen de ahorro individual, para el Seguro, o para Cajanal. En consecuencia, se debe seguir aplicando por analogía el artículo 19º transcrito.

(...) Obsérvese cómo el artículo 4º (de la ley 700 de 2001) establece un término de seis meses no para decidir sobre las solicitudes en materia de pensión, como lo hace el artículo 19º del Decreto 656 de 1994, sino para adelantar los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de las mesadas; es decir, para el desembolso efectivo del monto de las mismas.”

De lo anterior se sigue que, cuando el derecho de petición es ejercido frente a entidades o personas a cuyo cargo existe la obligación de reconocimiento y pago de pensiones, los términos constitucionales para resolver sobre las peticiones son los siguientes: (i) de quince días hábiles (cuando se trata de recursos en el trámite administrativo o de peticiones de información general sobre el trámite adelantado), (ii) de cuatro meses (cuando se trata de peticiones enderezadas al reconocimiento de pensiones) y (iii) de seis meses (cuando se trata de peticiones o de trámites enderezados al pago efectivo de las mesadas).

En este sentido existe un deber constitucional, derivado del derecho fundamental de petición, que pesa sobre las personas o entidades responsables del reconocimiento y pago de pensiones el cual comporta: (i) responder diligentemente las peticiones presentadas respetando los términos previstos por la ley, (ii) informar



sobre el trámite a las personas que acuden a sus dependencias mediante peticiones respetuosas y (iii) efectuar los pagos, cuando en derecho haya lugar, antes de que se cumplan los 6 meses previstos en la Ley 700 de 2001, que precisamente fijó condiciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los pensionados.

La sentencia C-1024 de 2004 precisó:

Página / 32

“De cuatro (4) meses para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional (reconocimiento de pensiones de vejez e invalidez así como las relativas a reliquidación y reajuste de las mismas). (Decreto 656 de 1994, artículo 19 y Ley 797 de 2003, artículo 9°).

Debe precisarse que el término de cuatro meses no es aplicable en el caso en que se trate del reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto allí opera el término fijado por el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, esto es, máximo "dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho"

En el mismo sentido recientemente la misma Corte Constitucional expuso en la sentencia SU-065 de 2018 recordó que la postura asumida por este organismo en sede de control abstracto y concreto, indica que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los pensionados a quienes se les ha reconocido su derecho prestacional en virtud de un mandato legal, convencional o particular ...por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales; reiterando en este sentido, la causación de dichos intereses a partir de la expiración del plazo de los 6 meses para hacer efectivo el ingreso a nómina y pago de las mesadas pensionales.

Así las cosas los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empiezan a causarse sólo a partir de la fecha en que la norma ordena el desembolso efectivo del monto de la mesada, esto es, a partir del vencimiento de los 6 meses que incluye 4 meses para el reconocimiento más 2 meses adicionales que se tienen para incluir en nómina en lo que respecta para las pensiones de vejez e invalidez; y a partir de los 3 meses que engloba 2 meses para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes más un mes adicional para la inclusión en nómina del solicitante.

Invoco como fundamento de derecho en el cual se basa la defensa de la Entidad, frente a la no procedencia del reconocimiento de los intereses moratorios, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y que textualmente me permito transcribir:

ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago.

La Corte Constitucional ha definido los intereses moratorios como aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización por los perjuicios que se ocasionan al acreedor al no recibir de manera oportuna el dinero que le es debido,

o en otras palabras, los intereses moratorios consisten en el resarcimiento por las afectaciones que se causan al acreedor “por el retraso en la ejecución de la obligación”. (Corte Constitucional, sentencia C-604-12).

Sentencias SL 4338/19 CSJ, T-586-12, Sentencia C- 601-00 y precisar que no hay lugar a intereses moratorios cuando se solicita reliquidación pensional, porque los intereses sólo tienen por finalidad: (i) Protección de las personas de la tercera edad sin recursos para su subsistencia, (ii) Perjuicio por la mora (devaluación moneda), la cual se satisface con la indexación, (iii) Ninguna regla permite interpretar que se reconocen en eventos de reajuste pensional.

Página / 33

### **INTERESES MORATORIOS CUANDO REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN NO SE PROBARON EN SEDE ADMINISTRATIVA**

Sin perjuicio de los argumentos ya expuestos, debe tenerse en cuenta que en sentencia SL11897-2016 de 24 de agosto de 2016, radicación 59673, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dejó expresadas las razones por las que se predica la improcedencia de la sanción establecida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por la no acreditación de los requisitos legales exigidos para el reconocimiento de la prestación que se debate, en los siguientes términos:

“...No obstante lo anterior, la Sala en sentencia CSJ SL704-2013, atenuó esa posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Cuando se den tales circunstancias no resultaría razonable imponer el pago de intereses moratorios porque la conducta del obligado «no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia».”

Ahora bien, y en sintonía con lo expresado por la Corte, puede evidenciarse que el demandante no acreditó haber cumplido con los referentes normativos exigidos por Colpensiones para la radicación y posterior reconocimiento prestación económica aquí pretendida.

Normatividad que se relaciona a continuación, y en los siguientes términos:

El artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece:

“ARTICULO 6o. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Modificado por el artículo 4o. de la Ley 712 de 2001. Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta. Mientras esté pendiente el

agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción. Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, ésta reemplazará la reclamación administrativa de que trata el presente artículo.”

La norma procesal es clara al determinar que el afiliado debe realizar un reclamo escrito sobre el derecho que pretende, y que este se entiende agotado únicamente cuando la solicitud es decidida o en virtud del fenecimiento del término legal sin una respuesta de la entidad pública.

Página / 34

Por lo tanto, existe una responsabilidad por parte del demandante de acreditar este supuesto de hecho.

### **PRUEBAS**

**DOCUMENTAL:** Expediente administrativo de la demandante.

**INTERROGATORIO DE PARTE:** Cítese a la parte demandante a interrogatorio que formularé verbalmente en la audiencia que se fije por el Despacho.

**EXHORTO A LA AFP PROTECCION S.A.:** Para que remita copia de la actuación surtida con ocasión a la vinculación del demandante, donde se deberá incluir, principalmente, el original del formulario de afiliación firmado por el demandante y certificación sobre estado pensional, lo anterior si para la audiencia de decreto de pruebas no se han aportado.

### **ANEXOS**

- Las anunciadas como pruebas en el acápite respectivo.
- Certificado de existencia y representación legal de la entidad (en CD).
- Poder conferido con sus respectivos anexos.
- Sustitución de poder en mi favor.

### **NOTIFICACIONES**

- Colpensiones recibirá notificaciones y comunicaciones en la Calle 49B número 64C-48, Edificio Distrito 65 local 108.
- El suscrito, en la Torre Nuevo Centro La Alpujarra - Carrera 55 No.40 A 20 Of. 1109 Conm. 3583174 Fax. 2610646 y 3006012806, correo: [palacioconsultores.colp@gmail.com](mailto:palacioconsultores.colp@gmail.com)

Respetuosamente,



**ROQUE ALEXIS ORTEGA CORREA**  
Abogado externo - COLPENSIONES  
C.C 1.037.579.003 de Envigado  
T.P: 209.067 del C. S de la J.



Recibo No.: 0019942895

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: GbdixbaBpanhiRbW

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO  
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: PALACIO CONSULTORES S.A.S  
Nit: 900104844-1  
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 21-368566-12  
Fecha de matrícula: 05 de Septiembre de 2006  
Ultimo año renovado: 2020  
Fecha de renovación: 03 de Julio de 2020  
Grupo NIIF: 4 - GRUPO III. Microempresas.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Carrera 55 40 A 20 OF 1109  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA  
Correo electrónico: palacioconsultores@gmail.com  
palacioconsultores@ensamblese.com  
Teléfono comercial 1: 2611971  
Teléfono comercial 2: No reportó  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 55 40 A 20 OF 1109  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA  
Correo electrónico de notificación: palacioconsultores@ensamblese.com  
palacioconsultores@gmail.com  
Telefono para notificación 1: 2611971  
Telefono para notificación 2: No reportó

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: GbdixbaBpanhiRbW

-----

Telefono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica PALACIO CONSULTORES S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

### **CONSTITUCIÓN**

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de septiembre 01 de 2006 Registrada en esta Entidad en septiembre 05 de 2006, en el libro 9, bajo el número 9203, se constituyó una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

BERDUGO & PALACIO CONSULTORES LTDA

### **TERMINO DE DURACIÓN**

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

### **OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad consiste en el desarrollo de el desarrollo de las siguientes actividades:

A) Prestación y comercialización de servicios profesionales en el campo jurídico o contable, en la economía, en las finanzas públicas o en cualquier profesión de carácter liberal afín, complementaria o conexas, a nivel de asesoría, consultoría, interventoría, auditoría, por la vía judicial o extrajudicial, de procesos de conciliación, mediación o arbitraje, en cualquiera de las áreas del derecho.

B) Promover la realización, y ejecución de eventos académicos, tales como simposios, congresos, seminarios, diplomados, en forma independiente o en asocio con entidades educativas nacionales o extranjeras.

C) El diseño y/o ejecución de proyectos urbanísticos, ambientalistas, de reforestación, de manejo de desechos sólidos y en general todos aquellos que tengan como objetivo la formulación y validación de modelos alternativos de gestión y educación ambiental.

D) Participar como socio en la constitución de sociedades, consorcios, joint venture, cuentas en participación, con objeto similar, complementario o conexas al suyo propio.

E) Adquirir derechos sobre propiedad industrial para desarrollados.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: GbdixbaBpanhiRbW

-----

F) Participar en investigaciones, en proyecto de incubación de empresas, con aportes de capital semilla, promoviendo el emprendimiento, la generación de empleo y la creación de riqueza.

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante que la sociedad tiene por objeto principal las actividades descritas anteriormente, podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.

### **CAPITAL**

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$8.000.000,00	800	\$10.000,00
SUSCRITO	\$4.000.000,00	400	\$10.000,00
PAGADO	\$4.000.000,00	400	\$10.000,00

### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

REPRESENTACION LEGAL: GERENTE: Es el representante legal de la compañía en juicio y fuera de juicio. A él corresponde el gobierno y la administración directa de la misma, como promotor, gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales.

Parágrafo 1: El representante legal podrá tener cuantos suplentes la Asamblea considere necesarios para el buen funcionamiento de la entidad, quienes podrán bien denominarse representante legal suplente, Gerente Suplente o Subgerente, así mismo tendrá otro representante legal principal denominado REPRESENTANTE LEGAL PARA PROCESOS ESPECIALES CON COLPENSIONES.

Parágrafo 2: EL REPRESENTANTE LEGAL PARA PROCESOS ESPECIALES CON COLPENSIONES: Será uno de los representantes legales de la sociedad, quien hará las veces de representante legal principal únicamente en asuntos judiciales que tengan relación directa al contrato con Colpensiones, es decir, en el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Realizar diligentemente las gestiones inherentes a los contratos de carácter jurídicos en el contrato de Colpensiones en los que la sociedad o el Representante Legal para procesos especiales, en razón de su representación sea apoderada.

2. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales para el contrato de Colpensiones. Es quien tiene la potestad de recibir poderes de Colpensiones y el deber inmediato de sustituirlo a los abogados coordinados por la firma para que éstos a su vez haciendo uso del derecho de postulación, realice las gestiones encomendadas a su nombre y bajo su responsabilidad dado que la firma no es quien lleva los procesos, sino el abogado como profesional.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: GbdixbaBpanhiRbW

-----

**PROHIBICIONES:** Se prohíbe expresamente al REPRESENTANTE LEGAL PARA PROCESOS ESPECIALES CON COLPENSIONES, realizar a nombre de la firma cualquier actuación diferente a las expresamente aquí mencionadas.

**FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE:** Son funciones y facultades del Gerente de la compañía las siguientes:

- a) Hacer uso de la razón social.
- b) Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas.
- c) Crear los empleos que se requieran para el normal funcionamiento de la compañía y designar y remover libremente los empleados, fijando el género de labores, remuneraciones, etc y hacer los despidos del caso.
- d) Constituir los apoderados especiales judiciales o extrajudiciales, que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que fuere delegables.
- e) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social, con plenas facultades para obligar a su representada, firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de títulos, girarlos, aceptarlos, prorrogarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, etc.
- f) Comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales, o cualquier derecho de la compañía, transigir, comprometer, desistir, recibir, novar e interponer acciones y recursos de cualquier género en todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la compañía, representar a la sociedad ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas jurídicas o naturales, etc, y, en general, actuar en la dirección de la empresa social.
- h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomienda a la Asamblea.
- i) Informar a la Asamblea, con la periodicidad que ella establezca, acerca del desarrollo de los negocios, la creación y provisión de empleos y demás actividades sociales y facilitar a dicho órgano el estudio de cualquier problema, proporcionándole los datos que requiera.
- j) Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan con los deberes de su cargo y vigilar continuamente la marcha de las empresas de la misma, especialmente su contabilidad y archivos.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: GbdixbaBpanhiRbW

-----

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	RODRIGO PALACIO CARDONA DESIGNACION	71.718.336

Por acta número 01-09 del 30 de enero de 2009, de la junta extraordinaria de socios registrado en esta Cámara el 4 de noviembre de 2009, en el libro 9, bajo el número 15664.

REPRESENTANTE LEGAL	FABIO ANDRES VALLEJO	71.379.806
SUPLENTE PARA PROCESOS ESPECIALES DE COLPENSIONES	CHNCI DESIGNACION	

Por Acta número 002 DE 2020, del 19 de junio de 2020, de la Asamblea, inscrito(a) en esta Cámara el 6 de julio de 2020, en el libro IX, bajo el número 13263

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Acta No. 01-09 del 30 de enero de 2009, de la Junta Extraordinaria de Socios, registrada en esta Entidad el 4 de noviembre de 2009, en el libro 9o., bajo el No. 15663, mediante la cual y entra otras reformas la sociedad se transforma de Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada y cambia su denominación por:

PALACIO CONSULTORES S.A.S.

Extracto de Acta No. 01-2014 del 11 de junio de 2014, de la Asamblea de Accionistas.

Extracto de Acta No.001 de 2017 del 9 de febrero de 2017, de la Asamblea General de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2017, bajo el No.3702 del libro 9 del registro mercantil.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal: 6910  
Actividad secundaria: 7010  
Otras actividades: 7020, 7110

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: GbdixbaBpanhiRbW

-----

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	ENSAMBLESE
Matrícula No.:	21-432973-02
Fecha de Matrícula:	05 de Septiembre de 2006
Ultimo año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 55 40 A 20 OF 1109
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL [WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO](http://WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO) DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

### **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

#### **TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$2,013,994,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7010

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: GbdixbaBpanhiRbW

-----

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



**SANDRA MILENA MONTES PALACIO**  
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

**COLPENSIONES Nit 900.336.004-7**  
**REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES**  
**PERIODO DE INFORME: Enero 1967 febrero/2022**  
**ACTUALIZADO A: 08 febrero 2022**

**INFORMACIÓN DEL AFILIADO**

Tipo de Documento:	<b>Cédula de Ciudadanía</b>	Fecha de Nacimiento:	<b>01/06/1959</b>
Número de Documento:	<b>70128260</b>	Fecha Afiliación:	<b>15/01/1980</b>
Nombre:	<b>JULIAN ALBERTO RICAURTE SANTAMARIA</b>	Correo Electrónico:	
Dirección:	<b>CRA 43A NO. 65 SUR 146</b>	Ubicación:	
Estado Afiliación:	<b>Asignado al RAI por Decreto 3995/2008</b>		

**RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR**

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
2016104970	ALMACEN EL CHEQUE N	15/01/1980	26/02/1981	\$5.790	58,43	0,00	0,00	58,43
2016101512	ALMACEN EXITO	07/09/1981	09/11/1981	\$5.790	9,14	0,00	0,00	9,14
2026112317	ALMACENES EXITO S A	09/11/1981	12/01/1982	\$7.470	9,29	0,00	0,14	9,14
2017112633	JOAN BURNS	20/05/1992	06/08/1992	\$70.260	11,29	0,00	0,00	11,29
2016109412	ALMACENES FLAMINGO S	22/10/1992	30/12/1992	\$70.260	10,00	0,00	0,00	10,00
2016110628	INVERSIONES EL PUNTO	02/02/1993	02/04/1993	\$89.070	8,57	0,00	0,00	8,57
2018403492	PROCOLORES LTDA	02/08/1993	30/06/1994	\$310.000	47,57	0,00	0,00	47,57
70569878	AGUDELO MESA JAIME A	01/04/1995	31/01/1997	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
800027374	TECNOLOGIA AUMENTARI	01/01/1997	30/04/1999	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTIC	01/06/1999	31/01/2000	\$0	0,00	0,00	0,00	0,00
								[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS: 154,14
								[11] SEMANAS COTIZADAS CON TARIFA DE ALTO RIESGO(INCLUIDAS EN EL CAMPO 10 * "TOTAL SEMANAS COTIZADAS"): 0,00

**RESUMEN DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES**

El siguiente resumen **INFORMATIVO** refleja los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy Colpensiones.

[12]Identificación Empleador	[13]Nombre o Razón Social	[14]Desde	[15]Hasta	[16]Último Salario	[17]Semanas	[18]Lic	[19]Sim	[20]Total
NO REGISTRA INFORMACIÓN								
								[21]TOTAL SEMANAS REPORTADAS:

**RESUMEN TIEMPO PÚBLICO SIMULTÁNEO CON TRADICIONAL (67 - 94) Y POST 94**

El siguiente resumen refleja los periodos laborados que presentan simultaneidad, es decir aquellos en los que usted prestó servicios para varios empleadores en el mismo periodo de tiempo.

[22]Desde	[23]Hasta	[24]Semanas Simultáneas
NO REGISTRA INFORMACIÓN		
		[25] TOTAL SEMANAS SIMULTÁNEAS:

<b>[26]TOTAL SEMANAS (cotizadas[10] + reportadas tiempos públicos[21] - simultáneos[25] )</b>	<b>154,14</b>
---	---------------

Si usted laboró en entidades del sector público y estas entidades no cotizaron a pensiones al Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, es posible que estos periodos no se vean reflejados en su reporte de Historia Laboral. De ser así, puede radicar la solicitud de inclusión de dichos periodos allegando la certificación Electrónica de Tiempos Públicos - CETIL expedida por su empleador, conforme al Decreto 726 de 2018 expedido por el Ministerio de Trabajo.

\* Los tiempos públicos tenidos en cuenta para la liquidación de una prestación económica decidida con anterioridad al 26/09/2017, no se visualizarán en el reporte de Historia Laboral.

Si ha trabajado en varias empresas al mismo tiempo, sólo se contabilizará en el total de semanas uno de los periodos y el salario base será la suma de lo cotizado, sin exceder

**COLPENSIONES Nit 900.336.004-7**  
**REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES**  
**PERIODO DE INFORME: Enero 1967 febrero/2022**  
**ACTUALIZADO A: 08 febrero 2022**

**C 70128260 JULIAN ALBERTO RICAURTE SANTAMARIA**

el máximo asegurable al momento de solicitar el reconocimiento pensional.

Las semanas de los periodos de abril y mayo de 2020 con observación "Pago Decreto 558/2020 COVID 19", serán consideradas en el reconocimiento pensional para: Cumplir requisito de las 1300 semanas, Cuando se trate de una pensión de vejez con 1 SMLMV y para el otorgamiento de las pensiones de invalidez y muerte.

**DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS ANTERIORES A 1995**

Este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

[27] Identificación Empleador	[28] Nombre o Razón Social	[29] Ciclo Desde	[30] Ciclo Hasta	[31] Asignación Básica Mensual	[32] Días Rep.	[33] Observación
2016101512	ALMACEN EXITO	07/09/1981	09/11/1981	\$ 5.790	64	Pago aplicado al periodo declarado
2016104970	ALMACEN EL CHEQUE N 8	15/01/1980	31/12/1980	\$ 4.410	352	Pago aplicado al periodo declarado
2016104970	ALMACEN EL CHEQUE N 8	01/01/1981	26/02/1981	\$ 5.790	57	Pago aplicado al periodo declarado
2016109412	ALMACENES FLAMINGO S. A.	22/10/1992	30/12/1992	\$ 70.260	70	Pago aplicado al periodo declarado
2016110628	INVERSIONES EL PUNTO LTDA	02/02/1993	02/04/1993	\$ 89.070	60	Pago aplicado al periodo declarado
2017112633	JOAN BURNS	20/05/1992	06/08/1992	\$ 70.260	79	Pago aplicado al periodo declarado
2018403492	PROCOLORES LTDA	02/08/1993	30/11/1993	\$ 99.630	121	Pago aplicado al periodo declarado
2018403492	PROCOLORES LTDA	01/12/1993	31/12/1993	\$ 99.630	31	Pago aplicado al periodo declarado
2018403492	PROCOLORES LTDA	01/01/1994	28/02/1994	\$ 107.675	59	Pago aplicado al periodo declarado
2018403492	PROCOLORES LTDA	01/03/1994	30/06/1994	\$ 310.000	122	Pago aplicado al periodo declarado
2026112317	ALMACENES EXITO S A	09/11/1981	31/12/1981	\$ 5.790	53	Pago aplicado al periodo declarado
2026112317	ALMACENES EXITO S A	01/01/1982	12/01/1982	\$ 7.470	12	Pago aplicado al periodo declarado

**DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DE 1995**

En el siguiente reporte encontrará el detalle de las semanas cotizadas a partir de enero de 1995 en adelante.

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Período	[38] Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40] IBC Reportado	[41] Cotización Pagada	[42] Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46] Observación
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199504	09/05/1995	53700901006708	\$ 118.933	\$ 11.900	\$ 11.900	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199505	07/06/1995	51036201002767	\$ 118.933	\$ 14.900	\$ 14.900	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199506	10/07/1995	19006201001467	\$ 118.933	\$ 14.900	\$ 14.900	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199507	11/08/1995	51037301001260	\$ 118.933	\$ 14.900	\$ 14.900	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199508	06/09/1995	55108201002367	\$ 118.933	\$ 14.900	\$ 14.900	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199509	06/10/1995	55108201002790	\$ 118.933	\$ 14.900	\$ 14.900	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199510	10/11/1995	55101201009277	\$ 118.933	\$ 14.900	\$ 14.900	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199511	06/12/1995	55108201003891	\$ 118.933	\$ 14.900	\$ 14.900	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199512	10/01/1996	51038101001234	\$ 118.933	\$ 14.900	\$ 14.900	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199601	08/02/1996	51038101001427	\$ 394.814	\$ 53.300	\$ 53.300	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199602	06/03/1996	55108201005770	\$ 221.086	\$ 29.800	\$ 29.800	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199603	03/04/1996	51038101001865	\$ 134.247	\$ 18.100	\$ 18.100	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199604	08/05/1996	51037701010444	\$ 335.265	\$ 46.700	\$ 46.700	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199605	11/06/1996	51037701011545	\$ 222.161	\$ 30.000	\$ 30.000	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199606	10/07/1996	51038101002823	\$ 423.144	\$ 57.100	\$ 57.100	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199607	09/08/1996	11133901014018	\$ 572.366	\$ 77.300	\$ 77.300	30	0	0	No Vinculado Traslado RAI

**COLPENSIONES Nit 900.336.004-7**  
**REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES**  
**PERIODO DE INFORME: Enero 1967 febrero/2022**  
**ACTUALIZADO A: 08 febrero 2022**

**C 70128260 JULIAN ALBERTO RICAURTE SANTAMARIA**

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Período	[38] Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40] IBC Reportado	[41] Cotización Pagada	[42] Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46] Observación
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199608	09/09/1996	51036501010967	\$ 233.200	\$ 31.500	\$ 31.500		30	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199609	07/10/1996	51038401001124	\$ 448.316	\$ 60.500	\$ 60.500		30	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199610	07/11/1996	51037701015940	\$ 296.177	\$ 40.000	\$ 40.000		30	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199611	06/12/1996	51038201004784	\$ 302.832	\$ 40.900	\$ 40.900		30	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199612	08/01/1997	23043501004371	\$ 629.026	\$ 84.900	\$ 84.900		30	0	No Vinculado Traslado RAI
70569878	AGUDELO MESA JAIME ALBERTO	NO	199701	05/02/1997	53700901015599	\$ 70.935	\$ 9.600	\$ 9.600		24	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199701	10/02/1997	16004500002784	\$ 53.333	\$ 7.300	\$ 7.300		4	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199702	07/03/1997	16004500003057	\$ 400.000	\$ 54.000	\$ 54.000		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199703	10/04/1997	19006005003664	\$ 400.000	\$ 53.900	\$ 53.900		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199704	13/05/1997	19006201004793	\$ 400.000	\$ 55.600	\$ 55.600		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199705	12/06/1997	19006005003999	\$ 400.000	\$ 55.700	\$ 55.700		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199706	09/07/1997	19006103000870	\$ 450.000	\$ 62.000	\$ 62.000		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199707	11/08/1997	19006004005774	\$ 450.000	\$ 66.800	\$ 66.800		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199708	10/09/1997	19006003004876	\$ 450.000	\$ 61.400	\$ 61.400		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199709	08/10/1997	19006004006126	\$ 450.000	\$ 61.100	\$ 61.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199710	06/11/1997	19006103001147	\$ 450.000	\$ 60.700	\$ 60.700		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA	NO	199711	03/12/1997	19006101003927	\$ 525.000	\$ 71.000	\$ 71.000		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTICIA S A	NO	199712	06/01/1998	19006102006181	\$ 495.000	\$ 66.800	\$ 66.800		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199801	04/02/1998	19006102006325	\$ 495.000	\$ 66.800	\$ 66.800		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199802	04/03/1998	19006102006496	\$ 495.000	\$ 66.800	\$ 66.800		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199803	07/04/1998	53700501018041	\$ 495.000	\$ 71.300	\$ 71.300		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTICIA S A	NO	199804	12/05/1998	16004500010216	\$ 495.000	\$ 67.100	\$ 67.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA	NO	199805	08/06/1998	16004500010452	\$ 495.000	\$ 66.800	\$ 66.800		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA AUMENTARIA SA	NO	199806	07/07/1998	19006102007146	\$ 556.900	\$ 75.200	\$ 75.200		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGI ALIMENTARIA S A	NO	199807	10/08/1998	19006101004871	\$ 556.900	\$ 75.200	\$ 75.200		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTICIA S A	NO	199808	09/09/1998	19006102007589	\$ 556.900	\$ 75.600	\$ 75.600		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199809	07/10/1998	53706101003172	\$ 556.900	\$ 75.200	\$ 75.200		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTICIA S A	NO	199810	10/11/1998	19006003006767	\$ 556.900	\$ 75.200	\$ 75.200		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTICIA S A	NO	199811	09/12/1998	19006202003653	\$ 556.900	\$ 75.200	\$ 75.200		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199812	07/01/1999	23040801025448	\$ 601.000	\$ 81.100	\$ 81.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTICIA S A	NO	199901	11/02/1999	16004500015425	\$ 601.000	\$ 82.000	\$ 82.000		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199902	09/03/1999	53706101004724	\$ 601.000	\$ 81.400	\$ 81.400		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199903	07/04/1999	53706101004873	\$ 601.000	\$ 81.100	\$ 81.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.A.	NO	199904	11/05/1999	12006301005616	\$ 601.000	\$ 83.000	\$ 83.000		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTICIA S A	NO	199906	09/07/1999	23040801031231	\$ 601.000	\$ 82.700	\$ 82.700		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTICIA S A	NO	199907	10/08/1999	12006301006463	\$ 601.000	\$ 81.400	\$ 81.400		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A	NO	199908	07/09/1999	23040501050888	\$ 601.000	\$ 81.100	\$ 81.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA	NO	199909	07/10/1999	23040801034872	\$ 645.600	\$ 87.300	\$ 87.300		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA	NO	199910	09/11/1999	23043599000654	\$ 645.600	\$ 87.500	\$ 87.500		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA	NO	199911	09/12/1999	23040801037465	\$ 645.600	\$ 87.800	\$ 87.800		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTICIA S A	NO	199912	05/01/2000	23040801038201	\$ 645.600	\$ 87.100	\$ 87.100		30	0	No Vinculado Traslado RAI
800027374	TECNOLOGIA ALIMENTARIA	NO	200001	08/02/2000	23040801039744	\$ 645.600	\$ 87.500	\$ 87.500		30	0	No Vinculado Traslado RAI



**COLPENSIONES Nit 900.336.004-7**  
**REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES**  
**PERIODO DE INFORME: Enero 1967 febrero/2022**  
**ACTUALIZADO A: 08 febrero 2022**

**C      70128260      JULIAN ALBERTO RICAURTE SANTAMARIA**

**DETALLE DE PERIODOS REPORTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO  
COTIZARON AL ISS HOY COLPENSIONES**

En el siguiente resumen encontrará el detalle por días, de los ciclos laborados en entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones.

[47] Identificación Empleador	[48] Nombre o Razón Social	[49] RA	[50]Ciclo	[51] Fecha de Pago	[52] Referencia de Pago	[53]Asignación Básica Mensual	[54]Cotización Pagada	[55]Cotización Mora Sin Intereses	[56] Nov.	[57] Días Rep.	[58] Días Cot.	[59]Observación
NO REGISTRA INFORMACIÓN												

C 70128260 JULIAN ALBERTO RICAURTE SANTAMARIA

### LECTURA DEL REPORTE DE LA HISTORIA LABORAL UNIFICADO

**Resumen de Semanas Cotizadas por Empleador:** este reporte contiene el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o como trabajador independiente, es decir las que se han cotizado desde enero de 1967 a la fecha.

1. **Identificación aportante:** número que identifica al aportante según el sistema al que pertenece. Hasta diciembre de 1994 número patronal y a partir de 1995, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.
2. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).
3. **Desde:** corresponde a la fecha de inicio del periodo de cotización.
4. **Hasta:** corresponde a la fecha final del periodo de cotización.
5. **Último salario:** salario reportado por el aportante. Para las cotizaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 1994, corresponde al último salario reportado y para las cotizaciones a partir de 1995 corresponde al salario reportado en el periodo desde-hasta.
6. **Semanas:** total de semanas correspondientes al periodo desde – hasta, sin descontar el tiempo de licencias y simultáneos.
7. **Licencias (Lic.):** refleja las licencias no remuneradas, es decir periodo no laborado ni remunerado. Este valor es descontado del total de semanas del periodo cotizado.
8. **Simultáneos (Sim.):** cantidad de semanas cotizadas de manera simultánea a través de dos o más aportantes.
9. **Total:** es el total de semanas cotizadas del periodo, menos las licencias no remuneradas y el tiempo cotizado de manera simultánea.
10. **Total de Semanas Cotizadas:** corresponde al total general de semanas cotizadas a la fecha de generación del reporte.
11. **Total de Semanas Cotizadas Alto Riesgo:** corresponde al total general de semanas cotizadas por tarifa de alto riesgo. Este total se encuentra incluido en el total de semanas cotizadas (campo 10 Total de Semanas Cotizadas.)

**Resumen de Tiempos Públicos no Cotizados a Colpensiones:** este reporte es informativo y refleja el total de semanas reportadas y laboradas en el sector público, los cuales no fueron cotizados al ISS hoy Colpensiones.

12. **Identificación empleador:** número que identifica la entidad empleadora con la cual tuvo relación laboral en el sector público.
13. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social de la entidad empleadora.
14. **Desde:** corresponde a la fecha inicial del aporte realizado, según lo reportado por la entidad certificadora.
15. **Hasta:** corresponde a la fecha final del aporte realizado, según lo reportado por la entidad certificadora.
16. **Último salario:** corresponde al último salario reportado por la entidad certificadora.
17. **Semanas:** corresponde a las semanas del periodo desde – hasta, sin descontar el tiempo de licencias y simultáneos.
18. **Licencias (Lic.):** corresponde a las interrupciones laborales no remuneradas, reportadas por la entidad certificadora.
19. **Simultáneos (Sim.):** cantidad de semanas laboradas de manera simultánea, es decir a través de dos o más empleadores en el mismo periodo de tiempo.
20. **Total:** es el total de semanas reportadas del periodo, menos las licencias no remuneradas campo (7. Licencias (Lic.)).
21. **Total de Semanas Reportadas:** corresponde al total general de semanas reportadas a la fecha de generación del reporte.

**Resumen Tiempo Público Simultáneo con Tradicional (67 - 94) Y Post 94:** este reporte refleja el total de semanas laboradas simultáneamente entre el sector público y privado para los tiempos tradicionales (67-94) y Post 94.

22. **Desde:** corresponde a la fecha inicial de la simultaneidad.
23. **Hasta:** corresponde a la fecha final de la simultaneidad.
24. **Semanas simultáneas:** cantidad de semanas laboradas de manera simultánea, es decir a través de dos o más empleadores en el mismo periodo de tiempo.
25. **Total Semanas Simultáneas:** corresponde a la sumatoria total de semanas laboradas simultáneamente a la fecha de generación del reporte.
26. **Total Semanas:** corresponde a total semanas cotizadas más(+) total semanas reportadas menos(-) total semanas simultáneas reportadas y cotizadas a la fecha de generación del reporte.

**Detalle de pagos efectuados anteriores a 1995:** este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

27. **Identificación Empleador:** para los periodos anteriores a 1995 corresponde al número Patronal.
28. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).

**C 70128260 JULIAN ALBERTO RICAURTE SANTAMARIA**

29. **Ciclo Desde:** corresponde a la fecha de inicio del periodo de cotización.
30. **Ciclo Hasta:** corresponde a la fecha final del periodo de cotización.
31. **Asignación Básica Mensual:** salario reportado por el aportante. Para las cotizaciones efectuadas hasta 31 de diciembre de 1994, corresponde al último salario reportado.
32. **Días Rep.:** número de días trabajados y reportados por el aportante para el periodo registrado.
33. **Observación:** indica en que situación o estado se encuentra su periodo de cotización reportado.

**Detalle de pagos efectuados a partir de 1995:** este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas a partir de enero de 1995 en adelante.

34. **Identificación del aportante:** número que identifica al empleador o trabajador independiente (NIT, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.).
35. **Nombre ó razón social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).
36. **RA:** indica si existe un registro de afiliación o relación laboral.
37. **Período:** año y mes al que corresponde el periodo cotizado.
38. **Fecha de pago:** fecha en que fue realizado el aporte.
39. **Referencia de pago:** número de registro del pago realizado (Calcomanía o Sticker o referencia de pago PILA).
40. **IBC Reportado:** es el salario (Ingreso Base de Cotización) declarado por el empleador o trabajador independiente, para el pago de la cotización.
41. **Cotización:** valor del aporte efectuado según el salario declarado en cada uno de los periodos.
42. **Cotización mora sin intereses:** es el dinero que el aportante adeuda por el periodo, sin incluir los intereses.
43. **Novedad(Nov.):** campo que indica con la letra "R", la novedad de Retiro reportada por el empleador.
44. **Días reportados:** número de días trabajados y reportados por el aportante en cada uno de los periodos.
45. **Días cotizados:** corresponde al número de días equivalentes al valor de la cotización pagada.
46. **Observación:** indica en que situación o estado se encuentra su periodo de cotización reportado.

**Detalle de periodos reportados por entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones:** este reporte contiene el detalle de las semanas reportadas por las entidades certificadoras.

47. **Identificación del aportante:** número que identifica la entidad empleadora con la cual tuvo relación laboral en el sector público.
48. **Nombre ó razón social:** nombre o razón social de la entidad empleadora.
49. **RA:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
50. **Ciclo:** año y mes al que corresponde el periodo reportado.
51. **Fecha de pago:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
52. **Referencia de pago:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
53. **Asignación Básica Mensual:** es el valor de la asignación básica mensual reportado por la entidad certificadora. En este reporte no se verán reflejados los demás factores salariales reportados por la entidad certificadora, sin embargo serán tenidos en cuenta al momento de la decisión de la prestación económica a que haya lugar.
54. **Cotización pagada:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
55. **Cotización mora sin intereses:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
56. **Novedad (Nov.):** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
57. **Días reportados (Rep.):** número de días reportados por la entidad certificadora en cada uno de los periodos.
58. **Días cotizados:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
59. **Observación:** indica si el periodo se encuentra simultáneo con otro empleador. En caso en que se encuentre vacío, indica que el campo no es simultáneo.

#### **Defensoría del Consumidor Financiero**

**Dirección:** Carrera 11 A Nº 96 – 51 Of. 203 Bogotá.

**Horario de atención:** 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

**Teléfonos:** (1) 6108161 - (1) 6108164.

**Correo Electrónico:** defensoriacolpensiones@legalcrc.com

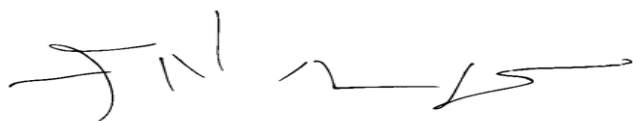
**Agradecemos su confianza recordándole que estamos para servirle. Este reporte esta sujeto a revisión y verificación por parte de Colpensiones.**

Señor:  
**JUZGADO 21 LABORAL DEL CIRCUITO**  
**MEDELLÍN - ANTIOQUIA**

**Referencia:** SUSTITUCIÓN PODER  
**Radicado:** 05001310502120210043600  
**Demandante:** JULIAN ALBERTO RICAURTE SANTAMARIA  
**Demandada:** Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

**Fabio Andrés Vallejo Chanci**, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio con la tarjeta profesional número 198.214 del C.S. de la J., en mi calidad de representante legal para procesos de Colpensiones de la firma **PALACIO CONSULTORES S.A.S.**, con plenas facultades de acuerdo con las previsiones de los artículos 74 y 75 del CGP, respetuosamente manifiesto que por medio del presente escrito sustituyo poder en favor del (la) Dr. (a) **ROQUE ALEXIS ORTEGA CORREA** identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1037579003 de Envigado (Antioquia) y portador (a) de la tarjeta profesional de abogado número 209067 del Consejo Superior de la Judicatura, quien queda revestido(a) de las mismas facultades a mí conferidas.

**Sírvase su señoría reconocerle personería jurídica, en los términos y para los fines de la presente sustitución de mandato.**



**Fabio Andrés Vallejo Chanci**  
C. C. 71.379.806  
T.P. 198.214 del C. S. de la J

Acepto,



**ROQUE ALEXIS ORTEGA CORREA**  
C. C. 1037579003 de Envigado (Antioquia)  
T.P. 209067 del C. S. de la J.





# República de Colombia



SCO816088781

SCC917676136

- 1 -

NOTARIA NOVENA (9) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA (3.370)

FECHA DE OTORGAMIENTO:

DOS (2) DE SEPTIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019).

\*\*\*\*\*

## NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO

CÓDIGO	ESPECIFICACIÓN	VALOR ACTO
490	PODER GENERAL	SIN CUANTIA

\*\*\*\*\*

PERSONAS QUE INTERVIENEN-----IDENTIFICACIÓN

PODERDANTE:-----

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones -----

NIT. -----900.336.004-7

APODERADO: -----

PALACIO CONSULTORES S.A.S ----- NIT. 900.104.844-1

\*\*\*\*\*

En Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los DOS (2) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), ante el Despacho de la NOTARÍA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., cuya Notaria titular es la Doctora ELSA VILLALOBOS SARMIENTO, se otorgó escritura pública que se consigna en los siguientes términos: -----

\*\*\*\*\*

COMPARECIERON CON MINUTA ESCRITA Y ENVIADA: -----

Compareció el Doctor JAVIER EDUARDO GUZMÁN SILVA, mayor de edad, de nacionalidad colombiano, identificado con cédula de ciudadanía número 79.333.752 expedida en Bogotá, con domicilio y residencia en Bogotá, en su condición de Representante Legal Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE, con NIT. 900.336.004-7, calidad que acredita



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

SCC917676136

SCC917676136

XHIF9C8ZK2U9GK8U9GK

26/06/2019 01/08/2019



el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se protocoliza a través de la presente escritura para que haga parte de la misma, sociedad legalmente constituida mediante Acuerdo No 2 del 01 de Octubre de 2009, manifestó que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1, confiero poder general, amplio y suficiente a la sociedad **PALACIO CONSULTORES S.A.S** identificada con NIT **900.104.844-1**, legalmente constituida mediante documento privado de Septiembre 01 de 2006, debidamente inscrito el 05 de 2006, libro 9, bajo el número 9203 según consta en la Certificado de existencia y Representación legal Cámara de Comercio de Medellín, documento que se protocoliza con el presente instrumento público, , para que en nombre y representación de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Colpensiones NIT: 900.336.004-7**, celebre y ejecute los siguientes actos: -----

**CLÁUSULA PRIMERA.** – Obrando en la condición indicada y con el fin de garantizar la adecuada representación judicial y extrajudicial de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE**, otorgo por el presente instrumento público **PODER GENERAL** a partir de la suscripción de la presente escritura a la sociedad **PALACIO CONSULTORES S.A.S** con NIT **900.104.844-1**, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE** ante la Rama Judicial y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte PASIVA, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional; facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mentadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial. -----

El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE**, con NIT. **900.336.004-7**, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que *“tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como*





# República de Colombia

## Nº 3370



SCC616088762



SCC717676137

- 3 -

representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda." -----

**CLÁUSULA SEGUNDA.** - El representante legal de la sociedad **PALACIO CONSULTORES S.A.S** con NIT **900.104.844-1**, queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, para sustituir el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante se quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE.** -----

La representación que se ejerza en las conciliaciones sólo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE.** -----

**CLÁUSULA TERCERA.** - Ni el representante legal de la sociedad **PALACIO CONSULTORES S.A.S** con NIT **900.104.844-1**, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto. -----

Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE** por parte del Representante legal y de los abogados sustitutos que actúen en nombre de la la sociedad **PALACIO CONSULTORES S.A.S** con NIT **900.104.844-1**, sin la autorización previa, escrita y expresa del representante legal principal o suplente de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE** y/o del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones. -----

**CLÁUSULA CUARTA.** - Al Representante legal y a los abogados sustitutos que actúen en nombre de la sociedad **PALACIO CONSULTORES S.A.S** con NIT **900.104.844-1**, les queda expresamente prohibido el recibo o retiro de las órdenes de pago de depósitos judiciales que se encuentren a favor de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE.** -----

**\*\* HASTA AQUÍ LA MINUTA ENVIADA Y ESCRITA \*\***



# República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Palacio Villalba de Santamaria  
NOTARIO NO. 101 DE BOGOTÁ

SCC616088762

SCC717676137

ATMJZWACBNDXWBIQCC

26/06/2019 01/08/2019



\*\*\*\*\*

### ADVERTENCIA NOTARIAL

- El notario responde de la regularidad formal del instrumento que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados, tampoco responde de la capacidad o aptitud legal de éstos para celebrar el acto o contrato respectivo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9° del Decreto Ley 960 de 1970. -----

### BASES DE DATOS

De acuerdo a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 se informa a los comparecientes que dentro del protocolo de seguridad adoptado por esta Notaría se ha implementado la toma de huellas e imagen digital de los otorgantes a través del sistema biométrico que se recoge por parte de la Notaría al momento del otorgamiento del presente Instrumento previa manifestación expresa de la voluntad de aceptación por parte de los intervinientes, conociendo que dicho sistema de control implementado por la Notaría tiene por objeto prevenir posibles suplantaciones, salvaguardar los instrumentos y la eficacia de los negocios jurídicos celebrados. -----

### El Notario advirtió a los comparecientes:

- 1) Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la verdad. -----
- 2) Que son responsables penal y civilmente en el evento en que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales. -----
- 3) Que es obligación de los comparecientes **leer y verificar cuidadosamente el contenido del presente instrumento; los nombres completos, los documentos de identificación, los números de la matrícula inmobiliaria, cédula catastral, linderos y demás datos consignados en este instrumento.** -----

Como consecuencia de esta advertencia el suscrito Notario deja constancia que los comparecientes "DECLARAN QUE TODAS LAS INFORMACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO SON CORRECTAS Y EN CONSECUENCIA, ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE CUALQUIER INEXACTITUD EN LAS MISMAS". El Notario, por lo anterior, informa que toda corrección o aclaración posterior a la autorización de este instrumento,





SC#416088763

SCC517676138

- 5 -

№ 3370

requiere el otorgamiento de una nueva escritura pública con el lleno de todas las formalidades legales, la cual generará costos adicionales que deben ser asumidos por los otorgantes conforme lo disponen los artículos 102, 103 y 104 del Decreto 930 de 1970 -----

## OTORGAMIENTO

Conforme al artículo 35 del Decreto 960 de 1.970, el presente instrumento es leído por los comparecientes quienes lo aprueban por encontrarlo conforme y en señal de asentimiento más adelante lo firman con el/la suscrita(o) Notaria(o). Los comparecientes declaran que son responsables del contenido y de la vigencia de los documentos presentados y protocolizados para la celebración de este acto jurídico.

## AUTORIZACIÓN

Conforme al artículo 40 del Decreto 960 de 1.970, la (el) Notaria(o) da fe de que las manifestaciones consignadas en este instrumento público fueron suscritas por los comparecientes según la Ley y que dan cumplimiento a todos los requisitos legales, que se protocolizaron comprobantes presentados por ellos y en consecuencia autoriza con su firma la presente escritura pública. -----

Esta escritura se extendió en las hojas de papel notarial de seguridad identificadas  
SCO816088761 / SCO616088762 / SCO416088763 / \_\_\_\_\_

Derechos Notariales: \$ 59,400

IVA: \$ 25.705

Recaudos para la Superintendencia: \$ 6.200 -----

Recaudos Fondo Especial para El Notariado: \$ 6.200

Resolución 0691 del 24 de enero de 2019, modificada por la Resolución 1002 del 31 de enero de 2019 de la Superintendencia de Notariado y Registro.



SC0416088783

CCCE47676498

74WG101A15B1Z1G70EDQ

26/06/2019 01/08/2019



**PODERDANTE**



**JAVIER EDUARDO GUZMÁN SILVA**

Actuando como representante Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE  
PENSIONES – Colpensiones EICE, con NIT. 900.336.004-7 -----

C.C. No. 79.333.752

Teléfono ó Celular: 2170100 ext: 2458

E-MAIL: poderesjudiciales@colpensiones.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 72 – 33, Torre B, Piso 10 Ciudad: Bogotá D.C.

FIRMA FUERA DEL DEPACHO ARTICULO 2.2.6.1.2.1.5 DECRETO 1069 DE 2015



*Elsa Villalobos Sarmiento*  
**ELSA VILLALOBOS SARMIENTO**

**NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ**



Fecha de expedición: 21/08/2019 - 9:13:12 AM

CAMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA



Recibo No.: 0018792433

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jvejbiichfaabc

**Nº 3370**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:-

PALACIO CONSULTORES S.A.S

NIT

900104844-1

Domicilio principal:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:

21-368566-12

Fecha de matrícula:

05 de Septiembre de 2006

Último año renovado:

2019

Fecha de renovación:

12 de Marzo de 2019

Grupo NIIF:

4 - GRUPO III. Microempresas

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 55 40 A 20 OF 1109

Municipio:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Correo electrónico:

palacioconsultores@ensamblese.com

palacioconsultores@gmail.com

Teléfono comercial 1:

2611971

Teléfono comercial 2:

No reporto

Teléfono comercial 3:

No reporto

Dirección para notificación judicial: Carrera 55 40 A 20 OF 1109

Municipio:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Correo electrónico de notificación:

palacioconsultores@gmail.com

palacioconsultores@ensamblese.com

Telefono para notificación 1:

2611971

Telefono para notificación 2:

No reporto



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jvejbiichfaabckb

Telefono para notificación 3: ... No reporto

La persona jurídica PALACIO CONSULTORES S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

#### CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de septiembre 01 de 2006 Registrada en esta Entidad en septiembre 05 de 2006, en el libro 9, bajo el número 9203, se constituyó una sociedad Comercial de responsabilidad Limitada denominada:

BERDUGO & PALACIO CONSULTORES LTDA

#### TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

#### OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad consiste en el desarrollo de el desarrollo de las siguientes actividades:

A) Prestación y comercialización de servicios profesionales en el campo jurídico o contable, en la economía, en las finanzas públicas o en cualquier profesión de carácter liberal afín, complementaria o conexas, a nivel de asesoría, consultoría, interventoría, auditoría, por la vía judicial o extrajudicial, de procesos de conciliación, mediación o arbitraje, en cualquiera de las áreas del derecho.

B) Promover la realización, y ejecución de eventos académicos, tales como simposios, congresos, seminarios, diplomados, en forma independiente o en asocio con entidades educativas nacionales o extranjeras.

C) El diseño y/o ejecución de proyectos urbanísticos, ambientalistas, de reforestación, de manejo de desechos sólidos y en general todos aquellos que tengan como objetivo la formulación y validación de modelos alternativos de gestión y educación ambiental.

D) Participar como socio en la constitución de sociedades, consorcios, joint venture, cuentas en participación, con objeto similar, complementario o conexas al suyo propio.

E) Adquirir derechos sobre propiedad industrial para desarrollados.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jvejbiichfaabckb

370

F) Participar en investigaciones, en proyecto de incubación de empresas, con aportes de capital semilla, promoviendo el emprendimiento, la generación de empleo y la creación de riqueza.

PARÁGRAFO PRIMERO: No obstante que la sociedad tiene por objeto principal las actividades descritas anteriormente, podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.

## CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:	NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	800	\$10.000,00
SUSCRITO	400	\$10.000,00
PAGADO	400	\$10.000,00

## ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACION LEGAL: GERENTE: Es el representante legal de la compañía en juicio y fuera de juicio. A él corresponde el gobierno y la administración directa de la misma, como promotor, gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales.

Parágrafo 1: El representante legal podrá tener cuantos suplentes la Asamblea considere necesarios para el buen funcionamiento de la entidad, quienes podrán bien denominarse representante legal suplente, Gerente Suplente o Subgerente, así mismo tendrá otro representante legal principal denominado REPRESENTANTE LEGAL PARA PROCESOS ESPECIALES CON COLPENSIONES.

Parágrafo 2: EL REPRESENTANTE LEGAL PARA PROCESOS ESPECIALES CON COLPENSIONES: Será uno de los representantes legales de la sociedad, quien hará las veces de representante legal principal únicamente en asuntos judiciales que tengan relación directa al contrato con Colpensiones, es decir, en el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Realizar diligentemente las gestiones inherentes a los contratos de carácter jurídicos en el contrato de Colpensiones en los que la sociedad o el Representante Legal para procesos especiales, en razón de su representación sea apoderada.
2. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales para el contrato de Colpensiones. Es quien tiene la potestad de recibir poderes de Colpensiones y el deber inmediato de sustituirlo a los abogados coordinados por la firma para que éstos a su vez haciendo uso del derecho de postulación, realice las gestiones encomendadas a su nombre y bajo su responsabilidad dado que la firma no es quien lleva los procesos, sino el abogado como profesional.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jvejbiichfaabckb

PROHIBICIONES: Se prohíbe expresamente al REPRESENTANTE LEGAL PARA PROCESOS ESPECIALES CON COLPENSIONES, realizar a nombre de la firma cualquier actuación diferente a las expresamente aquí mencionadas.

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	RODRIGO PALACIO CARDONA DESIGNACION	71.718.336

Por Acta número 01-09 del 30 de enero de 2009, de la Junta Extraordinaria de Socios registrada en esta Cámara el 4 de noviembre de 2009, en el libro 9, bajo el número 15664.

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA PROCESOS ESPECIALES DE COLPENSIONES	SANTIAGO UPEGUI QUEVEDO DESIGNACION	71.293.405
--	--	------------

Por acta número 001 del 11/01/2018, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrado(a) en esta cámara de comercio el 15/01/2018, en el libro IX, bajo el número 706.

FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: Son funciones y facultades del Gerente de la compañía las siguientes:

- Hacer uso de la razón social.
- Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas.
- Crear los empleos que se requieran para el normal funcionamiento de la compañía y designar y remover libremente los empleados, fijando el género de labores, remuneraciones, etc y hacer los despidos del caso.
- Constituir los apoderados especiales judiciales o extrajudiciales, que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándoles las facultades que estime conveniente, de aquellas que fuere delegables.
- Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social, con plenas facultades para obligar a su representada, firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de títulos, girarlos, aceptarlos, prorrogarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, etc.
- Comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales, o cualquier derecho de la compañía, transigir, comprometer, desistir, recibir, novar e interponer acciones y recursos



NO 3370

CC917676141

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jvejbiichfaabckb

de cualquier género en todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la compañía, representar a la sociedad ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas jurídicas o naturales, etc, y, en general, actuar en la dirección de la empresa social.

h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomienda a la Asamblea.

i) Informar a la Asamblea, con la periodicidad que ella establezca, acerca del desarrollo de los negocios, la creación y provisión de empleos y demás actividades sociales y facilitar a dicho órgano el estado de cualquier problema, proporcionándole los datos que requiera.

j) Premiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan con los deberes de su cargo y vigilar continuamente la marcha de las empresas de la misma, especialmente su contabilidad y archivos.

#### REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Acta No. 01-09 del 30 de enero de 2009, de la Junta Extraordinaria de Socios, registrada en esta Entidad el 4 de noviembre de 2009, en el libro 9o., bajo el No. 15663, mediante la cual y entra otras reformas la sociedad se transforma de Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada y cambia su denominación por:

PALACIO CONSULTORES S.A.S.

Extracto de Acta No. 01-2014 del 11 de junio de 2014, de la Asamblea de Accionistas.

Extracto de Acta No.001 de 2017 del 9 de febrero de 2017, de la Asamblea General de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2017, bajo el No.3702 del libro 9 del registro mercantil.

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:

6910: Actividades jurídicas

Actividad secundaria:

7010: Actividades de administración empresarial

Otras actividades:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jvejbiichfaabckb

7020: Actividades de consultaría de gestión  
7110: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades  
conexas de consultoría técnica

### ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CÁMARA DE  
COMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.

Nombre: ENSAMBLESE  
Matrícula número: 21-432973-02  
Ultimo año renovado: 2019  
Fecha de renovación de la matrícula mercantil: 12/03/2019  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Carrera 55 40 A 20 OF 1109  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Actividad comercial:

6910: Actividades jurídicas  
7020: Actividades de consultaría de gestión  
7010: Actividades de administración empresarial  
7110: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades  
conexas de consultoría técnica

LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO  
LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCUENTRA  
EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ  
SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE  
PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS  
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA  
PROPIEDAD.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

#### CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece  
inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos  
referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de  
representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10)  
días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los  
mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la  
oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de  
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.





SCC717676142

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jvejbiichfaabckb

33370

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO  
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados de matrimonio y certificados de defunción.

SCC717676142

XEFBVZGJ3DLIRTNS

01/08/2019



ENCUENTRO





SCC517676143

Certificado Generado con el Pin No: 9189798624603525

Generado el 26 de agosto de 2019 a las 11:35:19

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

33

diciembre de 2018). FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones del Despacho del Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, las siguientes: 1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto de COLPENSIONES, directamente, a través de tercerización de procesos, mediante corresponsales o cualquier otro mecanismo que permita mayor eficiencia en la prestación del servicio, expidiendo los actos administrativos que se requieran para tal efecto. 2. Ejercer la representación legal de la Empresa. 3. Delegar o constituir apoderados especiales para la representación judicial y/o administrativa de COLPENSIONES. 4. Dirigir la formulación y ejecución de políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación externa y organizacional. 5. Dirigir las políticas, programas, planes y proyectos para el relacionamiento con los diferentes grupos de interés de COLPENSIONES y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 6. Dirigir la gestión comercial de la Empresa, que involucre el diseño de mercadeo, la divulgación y capacitación, la afiliación de nuevas personas y la administración y fidelización de quienes ya se encuentran afiliados. 7. Dirigir la gestión integral de servicio al cliente en caminata a la atención de los ciudadanos, empleadores, pensionados y demás grupos de interés que permitan satisfacer de forma efectiva, sus necesidades. 8. Impartir directrices para el diseño e implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgos, de acuerdo a la normatividad legal vigente y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 9. Dirigir las políticas que en materia de Gobierno Corporativo adopte COLPENSIONES. 10. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto anual de presupuesto, los proyectos de adición y traslados presupuestales, con arreglo a las disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia. 11. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los estatutos de COLPENSIONES, sus modificaciones y las condiciones generales de carácter salarial y prestacional de los trabajadores oficiales de COLPENSIONES. 12. Presentar a consideración de la Junta Directiva y para aprobación del Gobierno Nacional, las modificaciones a la estructura y a la planta de personal de COLPENSIONES. 13. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva los estados financieros y las operaciones de crédito de COLPENSIONES, de conformidad con las normas vigentes. 14. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el Código de Ética y Buen Gobierno, así como sus reformas o modificaciones, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y disponer lo pertinente para su conocimiento y aplicación al interior de COLPENSIONES. 15. Desarrollar y dirigir el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva, ejecutarlas y rendir los informes que le sea solicitados. 16. Dirigir la ejecución presupuestal, comprometer y ordenar el gasto, suscribir los actos, y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de COLPENSIONES. 17. Nombrar y remover al personal de la Empresa que no corresponda a otra autoridad, dirigir los procesos de selección de personal, así como expedir los actos relacionados con la administración del mismo (tales como la distribución de personal, la suscripción y terminación de los contratos de trabajo, la expedición del manual de funciones y de competencias laborales y la creación o supresión de grupos internos de trabajo). La vinculación de los Vicepresidentes y los Jefes de Oficina de la Empresa deberá contar con la aprobación previa de la Junta Directiva. 18. Proponer para aprobación de la Junta Directiva, previo estudio técnico, la creación, supresión o fusión de Gerencias, Direcciones, Subdirecciones y Direcciones Regionales que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Empresa. 19. Crear, modificar o suprimir puntos de atención y corresponsales que se requiera para el cumplimiento del objeto social. 20. Recomendar a la Junta Directiva la aceptación de cesiones y subrogaciones con Empresas Públicas. 21. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el manual de contratación, con sujeción a lo previsto en la Ley. 22. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la Ley 734 de 2002 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 23. Dirigir las políticas para el fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 24. Dirigir las políticas de control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás actividades ilícitas, aprobadas por la Junta Directiva de Colpensiones que sean necesarias para el cumplimiento de la Empresa. 25. Rendir informes solicitados por las entidades de inspección, control y vigilancia y las demás autoridades a las cuales se les deba reportar información. 26. Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos o los estatutos. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Facultar al Presidente de COLPENSIONES por única vez, para escoger y contratar de los servidores públicos que hoy ocupan cargos de Vicepresidentes y Directores de Oficina Nacional en forma permanente, que surtieron los procesos de selección propios de la Administradora y que fueron aprobados por la Junta Directiva, para ocupar los cargos de Vicepresidentes y Jefes de Oficina. (Acuerdo 106 del 01 de marzo de 2017).

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
 Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

El emprendimiento  
es de todos

Min Hacienda





Certificado Generado con el Pin No: 9189798624603525

Generado el 26 de agosto de 2019 a las 11:35:19

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

**EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto 1848 del 15 de noviembre del 2016, en concordancia con el artículo 1° de la Resolución 1765 del 06 de septiembre de 2010, emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CERTIFICA**

**RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**NATURALEZA JURÍDICA:** Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo.. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CONSTITUCIÓN Y REFORMAS:** Acuerdo No 2 del 01 de octubre de 2009 Se crea bajo la denominación ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Colpensiones, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se crea como una Empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Acuerdo No 9 del 22 de diciembre de 2011 La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

Oficio No 2012082076 del 28 de septiembre de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia no encuentra objeción para que Colpensiones inicie operaciones como Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida

Decreto No 2011 del 28 de septiembre de 2012 Artículo 1. Inicio de operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como administradora de Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Artículo 2. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los afiliados y pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrá su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tiene el mismo régimen. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, mantendrán su condición, derechos y obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema General de Pensiones. Artículo 5 Pensiones Causadas. Las pensiones de los afiliados a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones -Caprecom, causadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto, serán reconocidas y pagadas por esta entidad, hasta tanto la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), asuman dichas competencias.

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:** Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012

**REPRESENTACIÓN LEGAL:** La administración de la Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones), está a cargo del Presidente quien será su representante legal. Las ausencias temporales o definitivas del Presidente serán suplidas por el Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales o por cualquiera de los Vicepresidentes de la entidad, siempre que cumplan con los requisitos del cargo. (Acuerdo 145 del 10 de

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda





SCC3176144

Certificado Generado con el Pin No: 9189798624603525

Generado el 26 de agosto de 2019 a las 11:35:19

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

3370

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

**NOMBRE****IDENTIFICACIÓN****CARGO**Juan Miguel Villa Lora  
Fecha de inicio del cargo: 01/11/2018

CC - 12435765

Presidente

Jorge Alberto Silva Acero  
Fecha de inicio del cargo: 14/12/2017

CC - 19459141

Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019001331-000 del día 8 de enero de 2019, la entidad informa que con documento del 17 de diciembre de 2018 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 01-2019 del 11 de enero de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).

Oscar Eduardo Moreno Enriquez  
Fecha de inicio del cargo: 11/07/2019

CC - 12748173

Suplente del Presidente

María Elisa Moron Baute  
Fecha de inicio del cargo: 21/03/2019

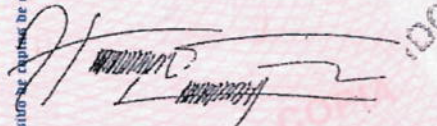
CC - 49790026

Suplente del Presidente

Javier Eduardo Guzmán Silva  
Fecha de inicio del cargo: 21/12/2018

CC - 79333752

Suplente del Presidente

  
**JOSÉ HERALDO LEALAGUDELO**  
**SECRETARIO GENERAL AD-HOC**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 - 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

Página 3 de 3

El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

SCC3176144

O41D08U6PLMUUOTF

01/08/2019



EN BLANCO

Elisa Villalón  
NOTARIA NOVENA

Elisa Villalón  
NOTARIA NOVENA



**NOTARIA**  
Bogotá D.C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



ES PRIMERA (1ª) COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA  
NUMERO 3.370 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE  
2.019, TOMADA DE SU ORIGINAL QUE SE EXPIDE EN DIEZ  
(10) HOJAS DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN SUS  
MÁRGENES, CONFORME AL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO  
960 DE 1970.

CON DESTINO A: LOS INTERESADOS.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ D.C., a los 02 de Septiembre de  
2.019.

*[Handwritten signature]*  
Elsa Villalobos Sarmiento  
NOTARIA NOVENA (9) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

**ELSA VILLALOBOS SARMIENTO**  
NOTARIA NOVENA (9) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

NOTA: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION QUE SE REALICE SOBRE ESTAS COPIAS ES ILEGAL Y  
UTILIZARLAS ASI ES UN DELITO QUE CAUSA SANCION PENAL.



# República de Colombia

Paquet notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



01/08/2019

5X83J1BVP85QAQP26



SCC017676145





**CERTIFICADO NÚMERO 299-2019  
COMO NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.**

**CERTIFICO:**

Que por medio de la escritura pública número **TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA (3.370)** de fecha **DOS (02) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019)** otorgada en esta Notaría, compareció el(la) señor(a) **JAVIER EDUARDO GUZMAN SILVA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **79.333.752** de Bogotá, en su condición de Representante Legal Suplente de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE**, confirió **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE**, a la sociedad **PALACIO CONSULTORES S.A.S.**, para que en su nombre y representación, celebre y ejecute las facultades y atribuciones allí consignadas.

Además **CERTIFICO** que a la fecha el **PODER** anterior se presume vigente, por cuanto en su original o escritura matriz **NO** aparece nota alguna que indique haber sido reformado o revocado parcial o totalmente.

Esta certificación de vigencia de poder **NO** sustituye la presentación física de la escritura pública que contiene el poder

Este certificado se expide con destino al **INTERESADO**  
Bogotá D.C., Dos (02) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Elaborado por: Billy Jiménez

  
Elsa Villalobos Sarmiento  
NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

**ELSA VILLALOBOS SARMIENTO**  
**NOTARIA NOVENA (9) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.**

NOTA: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION QUE SE REALICE SOBRE ESTAS COPIAS ES ILEGAL  
Y UTILIZARLAS ASI ES UN DELITO QUE CAUSA SANCION PENAL.



# República de Colombia



papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas , certificados y documentos del archivo notarial

**EN BLANCO**  
NOTARIA NOVENA (9) DE BOGOTÁ

01/08/2019

V118BO1310RU7BD1



SCC517676157

SCC517676157

